

ANÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN

TABLA DE CONTENIDOS

1. CASO MOP-GATE
2. CASO SQM Y OTROS
3. CASO FARMACIAS
4. CASO CAVAL
5. CASO CARABINEROS
6. CASO POLLOS
7. CASO PAPEL TISSUE

1. CASO “MOP-GATE”

Estudiantes: Yoselin Díaz
Vania Pavlovic
Fernando Reyes
Belén Vega

1. La segunda parte y final del trabajo corresponde a una síntesis de la primera entrega. Debe existir una síntesis inicial respecto del caso corrupción tratado, abordando los principales hechos, involucrados, etc.

El denominado caso MOP-GATE es el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Ricardo Lagos hacia el año 2000. Héctor Peña Véliz, en ese entonces dueño de la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE S.A) denunció una sustracción de \$190 millones desde su firma. Investigaciones posteriores apuntaron como culpable a su secretaria y a la madre de esta, quienes acusaron que la empresa era solo una fachada, que tenía vínculos con el Ministerio de Obras Públicas y que por medio de ésta se desviaban fondos para fines irregulares. El MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que jamás se llevaron a cabo, al mismo tiempo que GATE recibía pagos injustificados por autopistas concesionadas y sus proyecciones desde 1997. En 2003 el caso fue liderado por la jueza Ana Gloria Chevesich, quien investigó la sobrevaloración de contratos entre la cartera pública y empresas concesionarias, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos. De acuerdo a la resolución de la Corte Suprema “un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de las consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos destinados al pago de honorarios no consultados en el presupuesto público” (El demócrata, 2016). La investigación involucró también al ministro del MOP en ese entonces el socialista Carlos Cruz Lorenzen, acusado por delito de fraude al Fisco (Radio uchile, 2016). Así mismo se vio implicado al Jefe de Finanzas del MOP, Sergio Cortés Castro, quien le fue otorgado una pena de cinco años de cárcel por su responsabilidad como autor de delito de fraude al Fisco y la imposibilidad de ejercer cualquier cargo público. Además, 11 ex ejecutivos de empresas consultoras que firmaron contratos con el MOP, quienes, de acuerdo a la investigación, habrían proporcionado asesorías inexistentes. En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total \$799.142.217 (setecientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y dos mil doscientos diecisiete pesos).

Los “sobresueldos” trajeron a la luz pública un tema conocido por la elite, pero nunca institucionalizado ni normalizado: cuál debería ser el monto de las remuneraciones que perciben las máximas autoridades del país, incluido el Presidente. El quiebre trajo consigo tres juicios públicos al “sobre negro” (ética, legal y tributaria), una rápida respuesta del gobierno para regular el tema con la promesa de remitir un proyecto de ley al Congreso y la negociación con la oposición para poder aprobarlo (Repositorio, 2008). El caso también instaló con fuerza el debate sobre lo ético y lo legal en el ámbito público, y puso en la agenda los estándares de probidad y eficiencia exigibles en la administración del Estado (La Tercera, 2019). La investigación judicial de este caso comenzó en enero del año 2003 y concluyó en octubre del 2008. En el proceso quedó registrado que los fraudes al fisco sumaron más de \$ 1.250 millones de pesos producto de sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos reales y triangulaciones de dinero, mediante un estudiado tinglado destinado a defraudar al fisco. En la sentencia de julio del 2010, la magistrada que sustanciaba el proceso condenó a 14 personas por fraude al fisco y estafa; entre los condenados estaban el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Carlos Cruz, el ex jefe de finanzas del MOP, Sergio Cortés, el dueño de la empresa GATE, Héctor Peña Véliz, además de los funcionarios públicos Eduardo Balbontín, Gonzalo Castillo, Nazir Sapag y Oscar Araos, entre otros. Aparte de los 14 condenados, otras 17 personas procesadas fueron absueltas (Resumen, 2014).

Para Carlos Cruz siendo el mayor implicado dentro del caso, la corte determinó una condena a tres años de presidio y pago de millonaria multa, siendo investigado por defraudaciones al fisco, sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos. Pese a esto Cruz alegó su inocencia, declarando que: “El fallo divulgado en el transcurso del día de hoy se refiere, en lo fundamental, sólo a cuestionamientos en los procedimientos que se

siguieron para pagar compromisos propios de las actividades que en ese momento se llevaban a cabo en las reparticiones de mi cargo” (El mostrador, 2014). Por otra parte Óscar Araos y Nassir Sapag, juntos con otros funcionarios implicados no figuran de gran manera respecto a sus declaraciones o defensas respecto del tema, como sí lo hizo Cruz.

De las sentencias derivadas del caso, se destaca positivamente que a todos los involucrados del caso se les inhabilitó permanentemente del ejercicio de un cargo público, ya que se demuestra una voluntad y disposición de sanar y recuperar el daño realizado a la imagen del Estado y en especial a la labor de los funcionarios. En una línea similar, se destaca positivamente las multas aplicadas a los involucrados ya que se permite recuperar en cierta medida los ingresos pertenecientes al fisco que han sido mal utilizados. Un aspecto negativo de la sentencia se encuentra que ningún involucrado pasará tiempo efectivo en la cárcel, incluso los involucrados con penas más fuerte. Esto se debe a que, según el código penal chileno, los presidios menores que no pasen de cinco años pueden optar a alternativas como lo es la libertad vigilada (BCN, 2012).

2. Es necesario profundizar en aquellas temáticas planteadas en la revisión, problemática, debilidades del sistema normativo, crisis política asociada, etc.

Si bien las penas recibidas en el año 2016 como fin de este proceso judicial tan extenso y que sacó a la luz pública otros casos derivados de este, son consideradas por la opinión pública como un triunfo para el poder judicial, como lo mencionamos anteriormente, aún dicho castigo resulta ser muy suave para con los acusados considerando la magnitud del fraude y del modo en que se llevó a cabo y también muy importante tomando en consideración que los dineros del fraude pudieron ser ocupados en otros proyectos que aportaran al bienestar de la ciudadanía, esto es lo que más impacta del caso. Sin embargo, esto va mucho más allá que las penas recibidas por los imputados, debido a que se ve reflejado una de las debilidades más grandes que presenta no solo el poder judicial, sino que representa la debilidad de un sistema político que, sobre todo en el tiempo en que aconteció este caso, daba mucho espacio para que la corrupción pudiese pasar desapercibida.

Lo anterior a su vez, genera una problemática aún más compleja, debido a que al dejar que ocurran este tipo de sucesos corruptos, la democracia se ve afectada de manera directa, esto porque la ciudadanía comienza a sentir que los políticos son los que tienen el poder tanto de las decisiones como en libertad de acción, es decir, comienza a rondar la sensación de que no hay nada que hacer respecto a estas situaciones, es más, se considera que estos hechos de corrupción son comunes y nadie hace nada al respecto, incluso que este tipo de acontecimientos son encubiertos por las autoridades, aquellos repercuten en la democracia y las elecciones, tal y como se ha visto en los últimos años en el país, “el desánimo frente a una corrupción que vulnera valores e ideales fuertemente penetrados por la codicia y el poder del dinero” (Leal, 2017), por lo tanto, un caso de corrupción no es solo un caso de corrupción más de los que ya se han vivido y que probablemente seguirán ocurriendo, sino que va mucho más allá, pudiendo afectar un sistema tanto político como electoral y con esto la democracia y la credibilidad de la ciudadanía.

Sumándole a todo lo anterior, que esta desconfianza a la política y la democracia son factores que quitan legitimidad a las instituciones públicas y por ende, el Estado, crece la sensación de que el Estado es el gestor de todas aquellas acciones, debido a que las instituciones son la cara visible y más cercana a la ciudadanía, por ejemplo, en este caso de corrupción se vio involucrado un Ministro de Estado elegido directamente por el Presidente Ricardo Lagos, lo cual para la opinión pública y la ciudadanía en general es aún más problemático, puesto que podría hacer pensar a las personas que en algún caso el Presidente pudo haber tenido noción de lo ocurrido.

El caso MOP-GATE develó la falta de control hacia los ministerios, los ministros y los departamentos que lo componen. Y lo anterior, se debe principalmente al hecho de que durante el 2002, el MOP funcionó como un sistema recaudador de fondos. La forma fortuita en la cual se dieron a conocer los hechos dejaron preguntándose a muchos qué hubiese pasado si las ex secretarías del MOP no hubiesen hablado. ¿No existía un control hacia los ministerios? ¿Cómo nadie puede regularlos? Las anteriores preguntas fueron quizá solo algunas de los muchos cuestionamientos que la ciudadanía se hacía con gran indignación. Claramente, y debido a la magnitud del fraude, se debieron tomar medidas políticas e institucionales, poniéndose en la agenda los estándares de probidad y eficiencia que requerían las instituciones centrales.

MOP- GATE también marcó un antes y un después respecto a la manera en que el Poder Judicial ejerce su independencia, alejándolo de la muy criticada condescendencia hacia los gobiernos de turno. Además, los poderes Ejecutivo y Legislativo promovieron la aprobación de leyes que hicieron de la transparencia y probidad requisitos de la función pública. Sumado a ello, el connotado acuerdo entre Lagos (oficialismo) y Longueira (oposición) dio inicio a la Agenda de Modernización del Estado. Por su parte, la Agenda de Probidad y Transparencia logró la Ley de Acceso a la Información Pública. (La Tercera, 2009).

Lo anterior demuestran los cambios en cuanto a transparencia y probidad que tuvo que incorporar el gobierno y sus instituciones, lo anterior, debido a las profundas fallas, faltas de control, y ocultamiento de muchos procesos e información. Si bien los tecnicismos respecto a qué específicamente falló en el caso MOP-GATE fueron muchos, resulta interesante mostrar lo que le faltaba por sobre todas las cosas a las instituciones gubernamentales: transparencia.

3. Sintetizar las principales propuestas de mejora asociadas al caso. Éstas propuestas deben contribuir a mejorar los controles y reducir las posibilidades de reincidencia.

Dentro de las principales propuestas de mejora a la situación generada por el caso MOP-GATE, se pueden sintetizar en:

- 1. Tener una institucionalidad acorde a los tiempos actuales y necesidades de la ciudadanía:** La tenencia de un sistema que tenga regulado el sueldo de todos los funcionarios públicos y en especial de los altos directivos, junto con un control y una apertura de la información sobre los gastos reservados. Esto permite generar una mayor rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía se encuentre constantemente informada.
- 2. Tener un sistema de Alta Dirección Pública:** Este sistema al seleccionar a altos directivos netamente según sus antecedentes, competencias y experiencia, permite reducir las probabilidades de tener a personas que intenten perjudicar la institucionalidad del Estado, ya sea realizando desfalcos, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros.
- 3. La formación de alianzas políticas para la prevención de corrupción:** Tomando la experiencia de lo que fue la creación de la comisión asesora en Transparencia y Probidad Pública, donde sus miembros integrantes pertenecían a casi todos los espectros políticos de la fecha, la formación de alianzas políticas para la prevención de la corrupción permite facilitar y generar un consenso y agendas en pos de combatir estos tipos de casos.
- 4. Constante modernización en la reglamentación de los gastos públicos:** Como medidas ejecutadas por la agenda modernizadora luego de haber ocurrido el caso de MOP-GATE, no pudieron prevenir ni entregar soluciones definitivas frente a irregularidades como lo fueron los casos de Chile Deportes, Registro Civil y donde incluso, las causas por delito de corrupción aumentaron en un 50% de

2007 al 2008 (LaTercera, 2009). Lo anterior muestra la necesidad de tener un proceso constante de modernización, el cual no solamente se concentre en aumentar las penas frente mal uso del fondo público, sino que busque analizar y comprender sus causas para poder generar una prevención eficiente.

5. La ratificación de la independencia del poder judicial: Se necesita constantemente ratificar la independencia del poder judicial frente al Poder Ejecutivo y Parlamentario. Esto permite que los juicios que se lleven por casos de corrupciones lleguen a penas efectivas; marcando la importancia de que nadie se encuentra sobre la ley sin importancia de su cargo o estatus.

6. Generar debate sobre el sueldo de los funcionarios con especial énfasis en los altos directivos públicos: Si constantemente se habla sobre los sueldos de los altos directivos y su comparación con sus símiles en el mundo privado, se podría llegar a acuerdos y negociaciones que busquen aumentar los sueldos para atraer mejores funcionarios y no perder a los que ya se encuentran en el sistema. Si bien no hay pruebas claras y concisas de que un aumento de sueldo podría prevenir totalmente casos de corrupción, podría servir como un estímulo para mantener buenos y correctos comportamientos sobre el manejo de dinero fiscal.

Referencias

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2012). Penas sustitutivas a la cárcel. Recuperado el 16 de junio del 2019 de: <https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/penas-sustitutivas-a-la-carcel>
- Cooperativa, (2010). Ex ministro Carlos Cruz fue condenado a tres años de pena remitida por el caso MOP-GATE. Recuperado el 17 de Junio del 2019 de: https://www.cooperativa.cl/ex-ministro-carlos-cruz-fue-condenado-a-tres-anos-de-pena-remitida-por-el-caso-mop-gate/prontus_notas/2010-07-01/082528.htm
- El Mostrador (2006). MOP: Fallo de Chevesich revela que en 2005 se intentó ocultar ilícito. Recuperado el 16 de Junio del 2019 de: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2006/03/29/mop-fallo-de-chevesich-revela-que-en-2005-se-intento-ocultar-ilicito/>
- El Mostrador. (2014). Corte confirma condena a tres años de presidio y millonaria multa para el ministro Carlos Cruz. Recuperado el 15 de junio del 2019 de: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/08/12/corte-confirma-condena-a-tres-anos-de-presidio-y-millonaria-multa-para-ex-ministro-carlos-cruz/>
- El Mostrador (2016). Suprema dicta sentencia definitiva en el caso Mop-Gate. Recuperado el 16 de junio del 2019 de: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/06/29/suprema-dicta-sentencia-definitiva-en-caso-mop-gate/>
- Emol (2003). Lagos y Longueira sellan acuerdo para avanzar en la modernización del Estado. Recuperado el 16 de junio del 2019 de: <https://www.emol.com/noticias/nacional/2003/01/16/102567/lagos-y-longueira-sellan-acuerdo-para-avanzar-en-modernizacion-del-estado.html>

- Emol (2004). Mop-Gate: Corte confirma encausamiento de Oscar Araos. Recuperado el 17 de junio del 2019 de: <https://www.emol.com/noticias/nacional/2004/01/20/135851/mop-gate-corte-confirma-encausamiento-de-oscar-araos.html>
- Emol (2015). Carlos Cruz a 12 años del MOP-GATE: “Lo sentí como un acto de tremenda injusticia”. Recuperado el 16 de junio del 2019 de: <https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/20/708994/carlos-cruz-a-12-anos-del-mop-gate-lo-senti-como-un-acto-de-tremenda-injusticia.html>
- Emol (2016). Corte Suprema dicta sentencias definitivas en el caso Mop Gate y confirma condenas. Recuperado el 16 de junio del 2019 de:
- <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/29/810116/Corte-Suprema-dicta-sentencia-definitiva-en-el-caso-Mop-Gate-y-confirma-condenas.html>
- La Nación (2003). Como inculpado declara el ex director del CIADE. Recuperado el 17 de junio del 2019 de: <http://lanacion.cl/2003/04/16/como-inculpado-declara-el-ex-director-del-ciade/>
- Leal, A. (2017). La debilidad de la Democracia. Columna de Opinión Política. Cooperativa. Recuperado el 04 de julio del 2019 de: <https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/la-debilidad-de-la-democracia/2017-10-30/070814.html>
- La Tercera. (2009). Caso MOP-Gate: alcances políticos y repercusiones institucionales. Recuperado el 16 de Junio del 2019 de: <https://www.latercera.com/noticia/caso-mop-gate-alcances-politicos-y-repercusiones-institucionales>

2. CASO SQM & Otros

Estudiantes: Valentina Carvajal
Maite Queupomil
Natalia Reyes V.
José Ricardo Vega

Contenidos

1. Introducción	9
2. Síntesis caso de corrupción	9
3. Revisión problemática	10
3.1 Debilidades del sistema normativo	11
3.2 Crisis política asociada	11
3. Propuestas de mejora asociadas SQM	12

1. Introducción

En el marco del curso de Dirección y Ética Pública se analiza en el siguiente informe uno de los muchos casos de corrupción que han sacudido a Chile, es decir al caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el cual ha generado en la población chilena desconfianza en la clase política según un estudio del Ministerio Público, por lo que consideramos importante el valor de exponer en detalle los hechos más relevantes del caso.

Primero que todo es necesario mencionar que el caso trata de una situación de cohecho, es decir el delito que implica la “entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte” (Pérez & Gardey, 2011). Ahora bien, la corrupción es “un fenómeno recurrente que está presente en todas las sociedades, pero que toma distintos aspectos y abarca diferentes ámbitos según sea el nivel de desarrollo”, además es posible observar que “el significado de la corrupción está fuertemente enraizado en el contexto sociocultural” (Rehren, 2000).

Por lo tanto, el caso SQM ocurre en un contexto determinado, donde los medios de comunicación tuvieron un papel importante a la hora de ir mostrando a la ciudadanía los involucrados y antecedentes del caso generando desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política e instituciones públicas que hasta el día de hoy, sumado a los nuevos casos de corrupción, se mantiene.

Es importante, por lo tanto, mostrar estos casos de corrupción y analizarlos con el propósito de buscar mecanismos que impidan que vuelvan a emerger, es así como el presente informe trata de mostrar al lector una síntesis de las principales aristas del caso de corrupción de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y algunas reflexiones sobre cómo mejorar los controles y reducir las posibilidades de reincidencia.

2. Síntesis Caso

Cronológicamente el caso Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) sale a la luz en febrero del año 2015 durante el transcurso de la investigación realizada al caso PENTA, donde el fiscal a cargo, Andrés Montes, se percató de la existencia de una boleta falsa correspondiente a Pablo Wagner, quién recibía pagos mensuales de su antiguo empleador mientras era subsecretario de minería. Esto lo justificaban mediante boletas que entregaba su cuñada María Carolina de la Cerda. Ante lo anterior el fiscal Montes decide revisar la aplicación de impuesto de María Carolina donde no encontró solo boletas extendidas al caso PENTA sino también a SQM por más de \$7.000.000 aproximadamente y además por trabajos que nunca se realizaron.

Posteriormente el caso SQM dejó de ser solo una arista del caso PENTA, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia contra los representantes legales de la empresa Soquimich, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a 4.340 millones de pesos.

Se trata de 237 facturas falsas, por un monto de 2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros 2.145 millones de pesos, documentos emitidos en el período correspondiente a los años tributarios 2009 al 2014.

El SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de 4.340 millones de pesos de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la Fiscalía.

La principal sospecha que surge es que SQM estaba entregando dinero para el financiamiento de campañas políticas de manera ilegal.

La importancia de este caso radica en que existe una gran cantidad de personas identificadas con la emisión de boletas falsas, donde la mayoría de ellos son asesores o participantes de campañas políticas vinculadas a parlamentarios de la nueva mayoría y de la Alianza por Chile. Esto toma una importancia aún mayor, cuando estas personas pueden ser influenciadas en la política por el dinero y surge la interrogante, ¿los diputados que participaron en la emisión de boletas falsas se dispondrán a participar o no en el parlamento en votaciones que afecten a SQM? Generando una crisis de legitimidad en el parlamento y reduciendo la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos al evidenciarse que posiblemente incurren en actos ilegales para financiar sus actividades políticas.

Además de este problema de confianza política, este caso repercute en el actuar de otras instituciones. El SII fue objeto de fuertes críticas, pues al haber descubierto estas boletas falsas era la única institución que podía solicitar a la Fiscalía realizar una investigación, sin embargo dio la opción a que los contribuyentes que tuviesen irregularidades en el pago de sus impuestos pudieran autodenunciarse y de este modo encontraran una salida administrativa, quedando libres de una investigación por parte de la Fiscalía.

De esta forma, la investigación queda como un caso de tributación, quitándole su dimensión política, además de quedar fijada a los plazos establecidos por el SII en que el 30 de abril de 2015, prescriben los delitos y faltas cometidos el año 2009 donde hubo campaña electoral.

De esta forma se puede asumir que si la fiscalía no logra tener acceso a la información antes de esa fecha se quedará sin investigar, o los casos a investigar y los delitos cometidos se encontrarían prescritos.

Este caso presenta rasgos antiéticos en la dimensión política, generando una fuerte falta de confianza por parte de la ciudadanía, pero su alta repercusión se encuentra en la impunidad de los posibles actores involucrados, pues debido al actuar del SII, el cual puede ser éticamente cuestionado, ya que lo que provocaron sus medidas es que, no se produjeran responsabilidades políticas en los involucrados, y son estas responsabilidades las que repercuten en la confianza y el bienestar de la ciudadanía.

3. Revisión Problemática

La problemática del caso SQM radica en la emisión de boletas falsas por parte de la empresa para financiar campañas políticas de manera irregular. El tratamiento judicial se llevó a cabo por el Octavo

Juzgado de la Garantía de Santiago que rechazó reabrir el caso SQM y fijó fecha para la preparación de juicio oral de los eventuales 16 acusados. Asimismo el tribunal calificó de negligencia el desempeño de la Fiscalía al omitir un interrogatorio a Julio Ponce, ex presidente de la empresa. En el desarrollo de este proceso se han encontrado debilidades al sistema judicial y una crisis política.

3.1 Debilidades del Sistema Normativo

Respecto al sistema judicial, cabe mencionar que cuatro de las cinco figuras más representativas de la clase política fueron sobreseídas, siendo estos Pizarro, Longueira, ME-O y Rossi. Esto se debe a dos debilidades del sistema judicial respecto al caso SQM. La primera de ellas hace referencia a que la información disponible para realizar las imputaciones fue escasa en algunas situaciones donde la Fiscalía no podía sustentar sus sospechas sobre el imputado en base a una cantidad de pruebas relevante. Consecuentemente, existe una limitación del sistema judicial referente a la cooperación de SII durante el proceso, lo que fue un problema a la hora del alcance y grado de justicia involucrada en los fallos y sentencias de los ex imputados.

Siguiendo la misma línea, SII quedó a cargo del caso SQM, dejando fuera a la Fiscalía, lo que significó tipificar el delito como tributario, quedando fuera la dimensión política. Asimismo, SII no interpuso querellas sobre los imputados, razón por la cual, varios de ellos fueron sobreseídos. Asimismo, en el comienzo de la investigación, el rol del SII, que como servicio público, definía el alcance que poseía la Fiscalía en la investigación, determinó que está no podría investigar el lapso de tiempo pre determinado por el Ministerio Público que correspondía de 2009 a 2014, sino que más bien, se acotará a sólo julio de 2009.

Lo anterior deja ver un problema sobre la excesiva participación de los negocios en la política en donde se presencia “un claro conflicto de interés que la Ley de Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés intenta solucionar, pero constantemente falla”, debido a las debilidades del sistema normativo (Academia Parlamentaria, 2017).

3.2 Crisis Política Asociada

Respecto a la crisis política asociada al caso SQM hace referencia a que las boletas ideológicamente falsas se circunscriben a diferentes sectores políticos, lo que quiere decir que afectaba de manera transversal a la clase política, por lo que habría un conflicto de interés para colaborar con la justicia. Asimismo, la salida del fiscal que llevó a cabo el caso durante los cuatro años de investigación implica la falta de continuidad del foco investigativo y judicial que se estaba llevando a cabo.

Además esta crisis al interior de la política genera pérdida de confianza de los ciudadanos, dado que este caso de corrupción “solo evidenció una degradación que lleva años y que incluye: partidos sin programas, desconectados de la sociedad; y elecciones ganadas por los que van a la reelección o los que más gastan” (Guzmán, 2016).

El caso SQM es un ejemplo claro del surgimiento de la crisis política, la cual viene incrementándose desde el retorno a la democracia, y es que estos actos afectan fuertemente de forma negativa la democracia chilena, puesto que “los partidos no solo son un ingrediente irremplazable de la democracia, sino que además la salud y el carácter de los partidos se halla entre los principales determinantes de la salud y el carácter de la democracia” (Guzmán, 2016).

Además, según un informe realizado por el Consejo para la Transparencia en el año 2015, señala que “entre el 81% y el 91% de los chilenos poseen poca o ninguna confianza en la capacidad de los políticos y jueces para resolver los problemas del país”, lo que deja en evidencia que nos encontramos frente a una crisis política fuerte, todo esto está fuertemente ligado al contexto chileno en donde la extensa relación “entre la política y los negocios dentro de nuestro país es la receta perfecta para el desastre” (Academia Parlamentaria, 2017).

4. Propuestas de mejora asociadas SQM

Sin duda alguna a partir de este caso, así como tantos más que han salido a la luz, la ciudadanía se ha mantenido atenta al actuar político y de los funcionarios/as públicos, y es que el hecho de que en este caso y la seguidilla de nuevos acontecimientos que subyacieron de éste, contando con la participación de entes políticos de ambos colores políticos ha dejado la vara de la desconfianza muy alta; es por eso que desde el Ejecutivo como desde el Legislativo deben continuar surgiendo propuestas de políticas públicas que apunten a controlar el actuar de los representantes de la ciudadanía.

A estas alturas se pensaría que es esencial la existencia de mecanismos incorporados a la orgánica interna de las empresas que les permitan transparentar sus acciones y la información con la que cuentan tanto de las instituciones, así como también de quienes la integran. Con el fin de que el seguimiento que estas tengan no esté centrado únicamente en el funcionamiento que tienen sino también que les permita crear valor público y que cuenten con la ciudadanía como testigo de cada acción que realizan, es decir las personas como fiscalizadores.

“los controles internos deberían apuntar a que toda transacción se apruebe previamente y registre con exactitud; pagos a terceros se autoricen sólo si se justifican su necesidad y propósito; los antecedentes de personas naturales y jurídicas contratadas se verifiquen para comprobar su integridad e identificar relaciones con PEPs; y se exijan aprobaciones especiales para realizar pagos sin licitación previa” (Poniachik, 2016).

Por otro lado, es necesario que en caso de que estas faltas ocurran exista la manera de tener la identificación de los actores involucrados, que esto mismo sea transmitido a la ciudadanía para que también estén en conocimiento y que finalmente desde los mismo poderes centrales se generen las sanciones necesarias para al menos quienes ejecutaron dichas faltas no tengan posibilidad de integrar nuevamente asociaciones públicas donde puedan obtener beneficios

El enfoque de políticas públicas ha focalizado su interés en las características de la burocracia, organización, procesos de tomas de decisiones, relaciones entre políticos y burócratas y mecanismos de control dentro del Estado democrático para prevenir y controlar la corrupción. Finalmente, la literatura sobre comportamiento político ha resaltado el impacto electoral de la corrupción, focalizándose también en los mecanismos de financiamiento de campañas políticas en forma abundante.

Otra consecuencia del concepto de que un acto es corrupto cuando el peso de la opinión pública así lo determina, es que el significado de la corrupción está fuertemente enraizado en el contexto sociocultural. Así, la perspectiva legal, por ejemplo, entra frecuentemente en conflicto con prácticas socioculturales concretas. De ahí que la perspectiva legal, en el caso chileno, no permita aprehender el fenómeno en su dimensión real ni insertarlo en la dinámica del proceso político, porque eventualmente muchas prácticas corruptas no están definidas como ilegales.

Por lo tanto, es de gran importancia recuperar esa confianza perdida que se menciona en un comienzo, generar mecanismos que no le den paso a la corrupción, es una tarea difícil, pero que se debe realizar, además se necesitan instrumentos que realmente funcionen para seleccionar a las personas que se desempeñan en los servicios públicos, que realmente tengan vocación de lo público y que sus intereses no interfieran con los intereses de la ciudadanía.

“Está más que claro que para poder avanzar como país los partidos políticos deben cumplir su tarea, pero no lo están haciendo. Los partidos políticos han tenido el afán de no progresar, de no innovar, y de no intentar mejora, solo con el fin de tener más poder o más asientos en el Senado o en la Cámara de Diputados.

Si los pactos y los partidos políticos mantienen esta inercia y esta falta de compromiso con la política, nuestro país no va a continuar desarrollándose nada; la educación gratuita y de calidad nunca llegará, la reforma constitucional se estancará constantemente y la descentralización del país no será nada más que una idea distante. La participación de los partidos políticos y de los parlamentarios es un factor esencial para el desarrollo del país, pero no está sucediendo como debería” (Academia Parlamentaria, 2017).

Referencias

- Academia Parlamentaria. (2017). La Crisis Política Chilena: impulsada por la desconfianza y la corrupción. Recuperado de: <http://www.academiaparlamentaria.cl/Archivo.aspx?idArchivo=714>
- Guzmán, Andrés. (2016). Crisis de la política: “Al final, el problema de Chile sigue siendo esencialmente la desigualdad”. Recuperado de: <https://ciperchile.cl/2016/02/16/crisis-de-la-politica-al-final-el-problema-de-chile-sigue-siendo-esencialmente-la-desigualdad/>
- Rehren, A. (2000). Clientelismo político, corrupción y reforma del Estado en Chile. Documento de Trabajo, 305. Recuperado de: https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304093611/refor2_02_rehren.pdf

3. Corrupción de las Farmacias

(2007-2009)

Estudiantes: Diego Camilo
Teresa Lizana
Constanza Rojas
Aura Sandoval

Contenido

Caso de estudio	15
Antecedentes documentales	16
Judicialización del caso	17
Opiniones de la defensa	17
Lecciones institucionales	18
Propuestas	19
Referencias	21

Caso de Estudio

El caso “*colusión farmacias*” al cual se hará referencia en el presente trabajo, data del año 2006 y tiene sus orígenes en la llamada “*guerra de las farmacias*”, dicho suceso consistió en que tres grandes cadenas farmacéuticas; **Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand**, planificaron y diseñaron un escenario donde surgió una guerra de precios, dicho suceso se manifestó con el enfrentamiento de comparaciones expresas de precios mediante campañas publicitarias, es decir, las cadenas mostraban abiertamente que sus precios eran más bajos y convenientes que los de la competencia (Marmolejo, s.f.). Tales acontecimientos desencadenaron en las denuncias en tribunales entre las mismas cadenas señaladas con anterioridad. De igual forma, respecto a lo señalado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) indica que el escenario que se generó “presionó a una disminución de márgenes de comercialización de dichas farmacias, respecto de medicamentos tipo Farma” (Marmolejo, s.f, p.423), lo anterior se refiere a los medicamentos para enfermedades crónicas y aquellos que requieren prescripción médica.

Desde aquel momento la FNE estimó que las tres compañías dejaron de actuar según una estructura competitiva de mercado “para dar inicio a un proceso de cooperación destinado a implementar el alza conjunta y coordinada de los precios de medicamentos indicados” (Marmolejo, s.f. p.424). Los antecedentes presentados por la FNE indican que desde diciembre de 2007 y abril de 2008 las tres farmacias mediante la coordinación lograron alzas significativas alcanzando un promedio de 48%, es más, en algunos casos, algunos medicamentos tuvieron un alza de 100% del precio de venta al público (Marmolejo, s.f). por otro lado, es importante señalar que según la investigación del fiscal Jaime Retamal (de la Fiscalía Centro-Norte) los laboratorios farmacéuticos cumplieron un rol fundamental en esta colusión, puesto que fueron ellos quienes actuaron de intermediarios y facilitaron el acceso a las listas de precios.

Ya en el año 2009, Farmacias Ahumada obtuvo un trato conciliatorio con la FNE mediante la “delación compensada”, esto significó que, a cambio de una disminución de la multa, la firma se comprometió a ayudar en el proceso investigativo con la entrega de datos claves. Tanto farmacias Cruz Verde y Salcobrand no se adhirieron al trato por lo cual enfrentaron un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), donde tuvo como resultado la aplicación de multas de US\$20 millones en el año 2012.

Antecedentes Documentales

Como ya se precisó en el punto anterior según determinó la fiscalía, el acuerdo comenzó a ejecutarse en diciembre de 2007. Las tres cadenas de farmacias volvieron a subir los precios concertadamente en enero, febrero, marzo y abril de 2008. Sin embargo, el hecho noticioso se originó hacia fines de 2008, teniendo su mayor explosión y exposición mediática a fines de marzo y principios de abril de 2009.

Lo anterior se puede corroborar al momento de hacer una búsqueda por fechas en las plataformas de internet. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en Google se coloca “Colusión farmacias Chile” en un rango de tiempo, que en este caso sería de 2007-2010, no existen titulares de medios de comunicación masivos que hablen del tema sino hasta en 2009. Si bien existen documentos referidos al caso, no hay ningún enunciado que hable sobre lo que realmente estaba sucediendo. Por lo tanto, en cuanto a los titulares que más se destacan sobre esta situación están:

“Caso farmacias: indignación generalizada por colusión de precios” (El Mercurio, 2009), Este fue el primer titular presentado por uno de los diarios nacionales más importantes del país, a fines de marzo de 2009, donde se expone la suma aproximada de ganancia por parte de las farmacias, como también la posibilidad de que el fiscal nacional económico, Enrique Vergara, demandará a nueve laboratorios para determinar su responsabilidad en el alza concertada de precios. También se aclaró que el juicio a Cruz Verde y Salcobrand seguía su curso, ya que no reconocieron su participación en los hechos, a diferencia de Farmacias Ahumada. Esto último tiene gran relevancia ya que el reconocimiento de parte de uno de los involucrados permite acercarse aún más a la verdad. “Esto es un hecho inédito, que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la fiscalía, reconozca el hecho y colabore. Creo que es una conducta digna de imitar”. Por otra parte, la noticia expone por un lado la molestia de ciertos políticos, quienes comentaron cómo abordar la situación y por otro la cantidad de reclamos que comenzó a recibir el SERNAC respecto de los precios de medicamentos (El Mercurio, 2009).

“Farmacias Ahumada confiesa colusión para subir precios y acuerda compensación con la fiscalía” (Economía y Negocios, 2009). Este titular si bien es de un medio mucho más técnico y que por tanto llega a una determinada población, detalla lo que es el proceso de colaboración de FASA, quienes llegaron a un convenio extrajudicial con la Fiscalía Económica, y pagarían al fisco US\$ 1 millón. También se desarrolla todo lo que está referido con la apelación de las otras dos cadenas de farmacias acusadas, quienes dan una dura respuesta a esta situación. Además de detallar los puntos que reconoce FASA y que se mencionan en el punto anterior, la noticia desarrolla las obligaciones de las partes, las cuales son:

- FASA se obliga a pagar cerca de US\$ 1 millón al Fisco; elaborar un código interno para desincentivar toda conducta que pueda considerarse contraria a las normas de la libre competencia, y establecer la prohibición absoluta a sus ejecutivos de mantener propiedad o participación alguna, directa o indirecta, en las otras requeridas, así como en la administración de sus negocios, sea presente o futura.
- La FNE se obliga a dejar sin efecto y renuncia a las peticiones formuladas en su requerimiento en relación a FASA, así como en relación con sus directores, administradores, ejecutivos y trabajadores, actuales o en la época de ocurrencia de los hechos ventilados (Ostornol, 2009).

El dossier del caso farmacias: Así se subieron los precios según FASA (Ciper, 2009), Ya pasando a titulares de principios de abril, esta noticia del Centro de Investigación e Información Periodística trae

una serie de elementos importantes para la ciudadanía. En principio se recalca la idea de que la guerra de las farmacias ahora se encuentra bajo el alero del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que gracias a la información otorgada por FASA, se puede llegar a calcular cómo esta colusión afectó los bolsillos de la población. Por lo tanto, a través de estos antecedentes CIPER elaboró con un listado de medicamentos y las alzas que experimentaron. Además, en el texto también se entrega el sistema utilizado, el cual es “muy planificado, casi matemático” para subir sincronizadamente los precios que reveló FASA en una minuta (Skoknic, 2009).

Ejecutivos de Farmacias Ahumada ponen en entredicho tesis de colusión de la cadena (El Mostrador, 2009), ya pasando a uno de los últimos titulares abordados, está este que fue a fines de julio de 2009, en el cual ejecutivos de Farmacias Ahumada dicen desconocer el alza coordinado de precios, otros por otro lado afirmaron conocer el caso, pero aseguran que fue la fiscal de la compañía quien indujo las preguntas. Esto es por parte de los mismos ejecutivos que otorgaron información crucial al inicio del caso. También se entrega un cronograma de precios y antecedentes sobre las contradicciones comerciales que rondan en torno a este caso.

Judicialización del Caso

La FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, en el que se estableció que existió una guerra de precios durante el año 2007 y que posteriormente *se pactó la paz* coordinando un alza en las tarifas (ídem). Cabe destacar esta práctica les significó un beneficio de \$13.107 millones de pesos para Cruz Verde, \$7.616 millones de pesos en Farmacias Ahumada, mientras que para Salcobrand el beneficio fue de \$6.539 millones de pesos (Fiscalía Nacional Económica, 2008). En el requerimiento se solicitaba una multa de 13 millones de dólares para cada cadena farmacéutica (ídem). Una vez concluido el proceso civil, se abrió una arista penal el año 2013 en la que el Ministerio Público solicitó condenas efectivas de cárcel para las diez personas imputadas por la colusión (nueve de las farmacéuticas y una de un laboratorio). En definitiva, la única persona que sufrió una pena de cárcel fue Gonzalo Izquierdo (Laboratorio), ya que las nueve personas imputadas que restaban para recibir una condena penal fueron absueltas el año 2015, en que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime la solicitud de penas de cárcel para los/as ejecutivos/as involucrados/as en la colusión de las farmacias (La Tercera, 2015).

Opiniones de la Defensa

En relación a las opiniones o defensas de los acusados podemos encontrar algunas declaraciones sobre el proceso de conciliación entre los acusados correspondientes a las tres farmacias involucradas realizada en abril de 2009 para esclarecer lo ocurrido y llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Nacional (FNE). Especificando lo anterior se encuentra la declaración por parte de los representantes de Farmacias Ahumadas S.A (FASA), quienes reconocen la colusión entre las cadenas desde 2007 hasta 2008 y el intercambio de información sobre los precios de algunos fármacos para aumentar su precio de manera conjunta con las demás cadenas de farmacias, por medio de ejecutivos de algunos laboratorios para obtener una reducción en los medicamentos y que recibieron como respuesta de estos ejecutivos el alza de manera conjunta de los precios con las demás cadenas rivales y que aceptan participar de esta medida y por lo mismo recibieron una lista con los precios que debían cobrar.

Explican también el contexto debido a las pérdidas de dinero por la anterior guerra de precios que existía entre esta y Cruz Verde durante el 2005 y la cual duró casi 3 años dando como resultado la pérdida de ganancias debido a la venta de los medicamentos a un precio menor que su costo de adquisición. Respecto a Cruz Verde, durante la misma instancia de conciliación “estima inaceptable la colusión como práctica comercial” (Tribunal de Libre Competencia, 2009, pág. 5), y se niega a la conciliación con el FNE, debido a que plantean que el documento no corresponde a una conciliación y es contrario al libre comercio, por lo que rechazan los términos del acuerdo de avenimiento entre la FNE Y FASA.

Finalmente, en cuanto a Salcobrand rechazan el acuerdo antes mencionado apelando a que ellos no participaron de los supuestos acuerdos sobre determinados fármacos y su actuación se debió a funcionamiento del mercado, manteniendo la postura de que ellos no tienen responsabilidad sobre lo ocurrido.

Luego de la sentencia tanto las defensas de Cruz Verde como Salcobrand anunciaron que recurrirían a la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del TDLC. En el caso de Cruz Verde el abogado de esta, José Miguel Grant “aún niega que la farmacéutica haya incurrido en actos de colusión, insistiendo que NO existen correos electrónicos y no era necesaria la colusión de “una empresa líder del mercado” (Miranda, 2012). Otros actores relevantes durante la recolección de información sobre el caso fueron los laboratorios y sus ejecutivos, ya que como el caso de un ejecutivo del laboratorio Novartis confesó que este estaba coludido con las farmacias, además de entregar nombres de personas con las que negociaban y que ellos proponían precios de los medicamentos a las farmacias. (Molina, 2010).

Lecciones Institucionales

En lo que respecta a las debilidades del SERNAC, del Tribunal de Libre Competencia y de las Asociaciones de Consumidores, se puede ver la falta de rigurosidad y mayor normatividad en este aspecto debido a que fue muy difícil demostrar quienes específicamente fueron los mayores perjudicados por la colusión de las tres grandes farmacias de Chile entre los años 2007 y 2008, ya que es muy poco regular que las personas guardaran las boletas de estos servicios y por lo mismo no se pudieron establecer la cantidad de personas afectadas por este delito. Ahora bien, llama la atención que los representantes de estas farmacias quedaran absueltos de cargos por falta de pruebas, y que el único que tuviera sentencia fuera representante de un sólo laboratorio, viendo la gravedad de los hechos y a quienes afectaban en mayor medida el hecho de que se coludieran debido a que la gran mayoría de los medicamentos que sufrieron el alza de sus precios eran consumidos por enfermos crónicos o de muy necesario uso para mantener su calidad de vida. Dando a cuestionar la falta de justicia en estos hechos y la falta de condenas de cárcel para los involucrados.

Respecto al SERNAC, este “interpuso una demanda colectiva en contra de las farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, con el propósito que las compañías compensen a los consumidores que se vieron dañados por la colusión ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008” (Sernac, 2013), debido a que planteaban que no era posible que las empresas lucran disminuyendo la calidad de vida de las personas, aun así este organismo solo funciona como receptor de denuncias sin poder ejecutar algún tipo de sentencia. Es importante mencionar, que llama la atención como esta institución no se dio cuenta antes de este suceso que afectaba directamente la salud de las personas, algunas de las cuales se vieron forzadas a dejar sus tratamientos médicos por la falta de dinero para costearlos o bien consumir medicamentos alternativos a estos que poseían una menor calidad, además de

mencionar que el alza de los precios fue sistemático y constante, llegando casi al doble del precio original en un tiempo no tan extenso.

Respecto al Tribunal de Libre Competencia, es relevante mencionar como este estableció condenas bastante bajas respecto a la sentencia correspondiente solo al pago de una suma de dinero, por lo demás bastante baja respecto a los prejuicios cometidos por las empresas. También llama la atención la duración del proceso judicial (hasta enero de este año aún no se establecían las medidas compensatorias hacia la ciudadanía y se sigue discutiendo sobre estas), y que aún no se mejoren las leyes que rigen estos procesos que el empresariado chileno siga cometiendo irregularidades de este tipo, lo que puede deberse a las bajas penas condenatorias a estos hechos las cuales no conllevan cárcel.

Llama la atención que a pesar de las bajas sentencias, la tardanza para el establecimiento de una sentencia y escoger una forma de compensar a los afectados, las asociaciones de consumidores no han participado de manera activa exigiendo mayores penas o estableciendo métodos compensatorios lo que puede deberse a un desinterés sobre este tipo de acontecimientos olvidando lo sucedido, no castigando (mediante dejar de comprar en ellas) a las cadenas farmacéuticas, ni exigiendo mayores descuentos en los medicamentos. Por otro lado, es importante mencionar el tiempo que se demoraron en descubrir estos hechos en base a los sucesos de alza de precios que se daba en común entre las farmacéuticas. Finalmente, es importante mencionar que a pesar de que se descubriera este hecho, siguen existiendo hechos irregulares en la venta de fármacos en estas farmacéuticas como la falta de información sobre los precios de esto, lo que da para pensar que las normas que regulan estos hechos son bastante poco efectivas para desestibar las acciones ilícitas y fraudulentas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos.

Propuestas

Es importante comprender la gravedad que tienen los delitos de colusión entre los diferentes competidores económicos en Chile. Cuando se generan este tipo de carteles, como es el caso farmacias, se aumentan los precios y los principales perjudicados son los consumidores, por otro lado, dichas prácticas “limitan la innovación y el crecimiento económico” (Aydin & Figueroa, 2016). Respecto al caso farmacias, el ministerio público para llevar el caso se basó en una legislación bastante antigua, se apegó al artículo 285 del código penal con el fin de poder dar una condena que implicara cárcel para los ejecutivos. El problema radica en que dicha legislación data del año 1864 y se originó para sancionar a vendedores de tela a finales del siglo XIX (Cruz, s.f.), es desde ese momento que muchos expertos criticaron el caso que estaba llevando el Ministerio Público. Por otro lado, es importante señalar que la legislación que regula la libre competencia se modificó en el año 2004, y estableció que no pueden ser dictadas las penas de cárcel para este tipo de delitos.

De igual forma tal y como señala gran parte de la bibliografía estudiada, a lo largo de la historia en Chile, no ha logrado aplicarse la normativa que castiga los delitos de colusión de forma eficaz, por tanto, ha tenido que sufrir muchas modificaciones la Ley de Defensa de Libre Competencia de Chile (Decreto de ley N° 211, del año 1973). Las posteriores mejoras a la Ley (implementadas tiempo después de que ocurriera el caso farmacias) desde su implementación, consiste principalmente en el aumento de multas, introducción de programas de delación compensada y el garantizar el derecho de más facultades intrusivas a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), también se ha intentado generar sanciones más importantes las cuales contemplan sentencias de cárcel y la imposibilidad de ocupar ciertos cargos

directivos a quienes hayan participado del cartel. Es importante señalar que Chile puso más énfasis en los casos de creación de carteles debido a lo sucedido con el caso farmacias (Aydin y Figueroa, 2016).

Luego de haber realizado una contextualización sobre el caso farmacias y la Ley asociada a este, cabe señalar que se considera esencial hacer mención sobre el Derecho de la competencia como así también de los derechos del consumidor que deben ser resguardados. En ese sentido, se considera primordial que las entidades privadas deban ceñirse a las normas sustantivas sobre la libre competencia en el país, por lo tanto, deben existir mecanismos y herramientas que faciliten la aplicación y fiscalización de dichas normas que establece la ley, esto con el fin de resguardar las libertades de un mercado competitivo.

En base a lo mencionado, es necesario efectuar avances respecto a la ley e institucionalidad con el fin de prevenir y sancionar según corresponda los actos que atenten contra la libre competencia y que afecten los derechos de los consumidores. Es por esto por lo que se considera esencial avanzar en los siguientes temas:

En primer lugar, se considera que se deben efectuar multas que sean más grandes respecto al tamaño de la empresa que ha cometido el delito, de esta forma, se generaría un clima de alerta en las otras empresas privadas de los diferentes rubros, es una forma para desincentivar la creación de carteles, puesto que se asume que las pérdidas serían muchas si incumplen con la Ley. Por otro lado, se considera primordial que exista una alianza entre los diferentes organismos que se encargan de sancionar los delitos de colusión, debe existir concordancia y un trabajo en equipo entre el Tribunal de la Libre Competencia y la corte suprema, como también con la Fiscalía Nacional Económica.

De igual forma, se cree importante generar incentivos respecto a la delación compensada, es decir, brindar más posibilidades de disminución de condena o multas a las entidades o individuos que se hayan visto involucrados en los casos de creación de carteles pero que estén dispuestos a cooperar con las autoridades para indagar en profundizar y poder sancionar a todas las entidades infractoras de la Ley. Respecto a la legislación en materia de penas afectivas de cárcel. Es primordial que tales delitos sean castigados como se debe, puesto que entendiendo la gravedad de lo sucedido con la colusión del caso farmacias, las autoridades deben tomar cartas en el asunto para evitar que otras entidades privadas cometan delitos sobre la libre competencia, que finalmente terminan perjudicando a los consumidores, es decir, a la sociedad en su conjunto. Por tanto, es esencial que se apliquen sentencias de cárcel a los imputados.

Por último, es necesario contar con elementos que sirven para prevenir la creación de carteles, en ese sentido se vuelve primordial avanzar en materia de fiscalización. Respecto a eso, el Estado debe garantizar una constante fiscalización para corroborar que las entidades privadas actúen en pos de la libre competencia con el fin de prevenir que dichas situaciones como el caso farmacia, vuelvan a tener lugar.

Referencias

- 24 horas. (29 de diciembre de 2015). *24 Horas*. Obtenido de <https://www.24horas.cl/economia/corte-confirma-absoluciones-en-caso-colusion-de-las-farmacias-1884628>
- Aydin, U., & Figueroa, N. (2016). Carteles: Propuesta para un combate efectivo a la colusión. *Políticas Públicas*, 88.
- Cárdenas, L. (19 de enero de 2019). *La Tercera*. Obtenido de <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/descuentos-en-medicamentos-y-dinero-a-beneficencia-farmacias-presentan-propuestas-para-indemnizar-a-consumidores-por-colusion/488959/>
- Cruz, M. E. (sin fecha). Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtenido de Pontificia Universidad Católica de Chile: <http://derecho.uc.cl/es/noticias/derecho-uc-en-los-medios/13625-maria-elina-cruz-se-refiere-a-la-colusion-de-las-farmacias-a-estudiar-etica-ila-respuesta-de-la-justicia-penal-ante-una-colusion>
- Donoso, P. (27 de marzo de 2009). *El Mostrador*. Obtenido de El mostrador: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2009/03/27/la-egresada-de-derecho-que-denuncio-la-colusion-de-las-farmacias-y-su-vinculo-con-ds/>
- Dchile. (01 de enero de 2012). *Dchile*. Recuperado el 20 de junio de 2019, de <http://www.derecho-chile.cl/el-delito-de-hurto-i-parte/>
- El Mercurio. (26 de marzo de 2009). *El Mercurio*. Obtenido de El Mercurio: http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090325/pags/20090325174316.html
- El Mostrador Mercados. (27 de noviembre de 2017). *El Mostrador*. Obtenido de <https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/11/27/aun-no-aprenden-sernac-denuncio-a-farmacias-de-las-tres-cadenas-mas-grandes-por-irregularidades-en-precios-de-medicamentos/>
- Fiscalía Nacional Económica. (2008). *Requerimiento contra farmacias*. Santiago de Chile: Fiscalía Nacional Económica.
- González, C. M. (sin fecha). Comentarios a algunos aspectos del caso de colusión de farmacias y sus proyecciones. 419-441.
- La Tercera. (9 de marzo de 2015). *Revisa las claves del caso de colusión de precios en las farmacias*. Obtenido de La Tercera: <https://www.latercera.com/noticia/revisa-las-claves-del-caso-de-colusion-de-precios-en-las-farmacias/>

- Miranda, M. (32 de enero de 2012). *Biobiochile.cl*. Obtenido de <https://www.biobiochile.cl/noticias/2012/01/31/salco-brand-y-cruz-verde-reciben-maxima-condena-por-colusion-podrian-pagar-us-19-millones-cada-una.shtml>
- Molina, J. (12 de julio de 2010). *el mostrador*. Obtenido de <https://m.elmostrador.cl/mercados/2010/07/12/caso-colusion-ejecutivo-de-laboratorio-novartis-confeso-como-las-farmacias-coordinaron-precios/>
- Ostornol, J. T. (25 de marzo de 2009). *Economía y Negocios*. Obtenido de *Economía y Negocios*: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=61233>
- Sernac. (1 de febrero de 2013). *Servicio Nacional del Consumidor*. Obtenido de <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-5129.html>
- Skoknic, F. (9 de abril de 2009). *Ciper*. Obtenido de *Ciper*: <https://ciperchile.cl/2009/04/09/el-dossier-del-caso-farmacias-asi-se-subieron-los-precios-segun-fasa/>
- The Clinic. (26 de marzo de 2009). *The Clinic*. Obtenido de *The Clinic*: <http://www.theclinic.cl/2009/03/26/%C2%A1pinera-es-accionista-de-farmacias-ahumada/>
- The Clinic. (2015 de junio de 2015). *The Clinic Online*. Obtenido de <https://www.theclinic.cl/2015/06/23/caso-farmacias-tribunal-absuelve-a-los-10-ejecutivos-involucrados-en-la-colusion-de-precios/>
- Tribunal de Libre Competencia. (01 de abril de 2009). *web.archive.org*. Obtenido de <https://web.archive.org/web/20111212132331/http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Audiencia%20de%20Conciliacion%2001%20de%20abril%20de%202009.pdf>

4. CASO CAVAL

Estudiantes: Vaitiare Bravo
Camila Flores
Ivania Menares
Tamara Meneses
Matías Silva

Descripción del Caso CAVAL

El caso a tratar en el presente trabajo corresponde al llamado “Caso Caval”, el cual presenta como conducta antiética el tráfico de influencias y acceso a información privilegiada ejercidas por Sebastián Dávalos para ayudar a obtener un crédito por una cantidad superior a US\$ 10 millones para la compra de terrenos en Machalí y que fue aprobado a tan sólo un día después que Michelle Bachelet, su madre, fuera reelecta en las elecciones presidenciales del año 2013 (Cancino Martínez & Orellana Parra, 2015).

El uso de los suelos de Machalí era de carácter agrícola y presuntamente Dávalo habría ejercido tráfico de influencias para permitir un cambio rápido en el Plan Regulador, para pasar a ser de uso urbano. Lo anterior, tendría como consecuencia el aumento de la plusvalía, favoreciendo así a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de su esposa Natalia Compagnon, ya que la compra de dichos terrenos tenía como finalidad revenderlos para desarrollos inmobiliarios (Gaggero, 2015). Cabe destacar, que el cambio de uso de suelo se daba por hecho en la municipalidad, sin embargo, no se produjo antes de la venta de los terrenos y a abril del 2015 aún no se producía (Emol, 2015).

Además, se cuestiona si el propietario que vendió el terreno sabía o no del cambio del plano regulador que se venía, aumentando su valor y si la empresa compradora sabía o no de la información, ya que se pregunta por qué el primer dueño vendió a un precio tan barato un terreno que posteriormente aumentaría su valor, es por esto que se acusa de acceso a información privilegiada y lobby (Liencura, 2015)

La principal institución involucrada es el Banco de Chile, banco que otorgó el crédito de alta suma a pesar de que la asociación perteneciente a Natalia Compagnon no cumplía con los requerimientos para tener acceso a dicha suma de dinero. Este crédito fue tratado en una reunión entre Compagnon, en compañía de Dávalos, con Andrónico Luksic, vicepresidente del banco ya mencionado y debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos para optar al crédito resulta cuestionable la fluida relación entre el vicepresidente del Banco de Chile y la copropietaria de sociedad (El Mostrador, 2015).

También, se indica que Herman Chadwick, síndico de quiebras, pagó más de \$400 millones a Juan Díaz, conocido experto inmobiliario, para que intermediara en la tramitación del Plan Regulador Intercomunal con la finalidad de que los suelos de las 44 hectáreas se convirtieran en urbanos, por lo que si se apelaba a los contactos públicos precisos, los involucrados iban a tener grandes ganancias monetarias, ya que en Chile no existe una legislación que aporte al Estado una fracción de las plusvalía que se producen debido a los cambios de institucionalidad (Herman, 2016).

Estos hechos, desde la percepción de la ciudadanía, generaron grandes consecuencias negativas de las cuales La Moneda no pudo recuperarse, ya que estas acciones fueron asociadas al entorno familiar y se percibieron como faltas que producen marcas indelebles en la imagen de la presidenta.

Tratamiento del Caso por parte de los Medios de Comunicación

Los antecedentes del Caso CAVAL se pueden subdividir en al menos dos momentos:

I. Etapa inicial: Destape del caso (febrero 2015)

El caso CAVAL sale a la luz el 6 de febrero de 2015, mediante un reportaje de la revista “Qué Pasa” (Revista Qué Pasa, 2015). En este reportaje se da cuenta cómo el hijo de la ex Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon se vieron significativamente involucrados en el caso de corrupción a describir.

El caso tiene relación a la aprobación de un crédito por más de US\$ 10 millones por parte del Banco de Chile, el equivalente a \$ 6.500.000 millones, los cuáles serían utilizados para la compra de tres predios en la comuna de Machalí en la Región de O’Higgins. La particularidad de este préstamo recae en el eventual beneficio que podía significar el cambio de uso de suelo de los predios en cuestión, pues se esperaba una modificación al plan regulador, el que iba a significar que una comuna con fuerte potencial de urbanización aumentara su plusvalía.

A pesar de la aprobación del crédito y la compra de terrenos, cuatro meses antes fue rechazado el cambio en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. La incertidumbre que generó su rechazo hizo que varias ofertas de compra fueran declinadas, provocando mucha incertidumbre respecto al pago del crédito. Sin embargo, pocos días antes de la fecha límite con el banco se logra amarrar una promesa de compra, por el monto de \$9.500 millones.

Todo iba bien hasta que a inicios de noviembre de 2014 comienzan a quedar al descubierto los primeros detalles de corrupción. Lo anterior, se debió a una demanda laboral en contra de la empresa CAVAL, en donde, Sergio Bustos reclama que la empresa le adeuda aproximadamente \$200 millones luego de que en mayo de 2013 lo contrataran para gestionar un crédito bancario y concretar la compra de dichos terrenos.

II. Etapa de desarrollo del caso (2015-2018)

Tras el reportaje, las indagatorias correspondientes comenzaron a dar luces de las reiteradas prácticas y tráfico de influencias que presentaba el caso. Por un lado, salió a la luz la realización de una reunión entre el dueño de Banco de Chile, Andrónico Luksic, con el hijo de la ex mandataria, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon quienes mediante esa instancia acordaron oficialmente el otorgamiento del crédito necesario para comprar los predios (24Horas.cl, 2015).

Una vez comprados los terrenos, estos fueron revendidos por un valor de \$9.500 millones, dejando una ganancia de \$3.000 millones. Tras la notoria diferencia entre ambos montos, quedó a la vista un posible uso de influencias, lo que tiene fuerte relación con los cambios en el Plan Regulador que se suponía estaba en proceso.

Lo curioso de este caso son las relaciones de influencia existente entre los diferentes actores, pues resulta particular el crecimiento exponencial que comienza a tener la empresa CAVAL, pasando de tener \$6 millones como patrimonio al momento de su creación, a llegar a facturar \$1.500 millones¹ un

¹ Disponible el balance financiero en: <https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Balance2012.pdf>

año después (CIPER, 2015). Por otro lado, se hacía evidente la relación existente entre CAVAL y la Municipalidad de Machalí (quienes debían o no aprobar el cambio en el Plan Regulador).

Tratamiento Judicial o Jurisdiccional del Caso Caval

Denuncia, proceso de investigación y delitos imputados.

Estallado el caso, como primeras diligencias, en el mes de abril de 2019, Natalia Compagnon Sebastián Dávalos prestarían declaración en la Fiscalía de O'Higgins. Procedidas estas diligencias, el caso tomaría tintes de gravedad en septiembre de 2015. En específico, el día 7 de aquel mes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaría una querella en contra de Juan Díaz, colaborador de Caval, Jorge Silva, ex Director de Obras de la Municipalidad de Machalí y Cynthia Ross, arquitecta asesora del mismo municipio. En el caso de Díaz, los abogados del Estado denuncian pago de sobornos para cambiar el plano regulador de la comuna. En tanto, a Silva y Ross se les denuncia por cohecho: recibir dineros para, en calidad de funcionarios públicos, incidir en el cambio de plano regulador y uso de suelo de los terrenos comprados por Caval (Godoy, 2015).

Formalizaciones

Ante tales hechos y luego de varios meses de investigación, el viernes 29 de enero de 2016, el caso Caval tendría su primera audiencia de formalización. Un total de 13 personas naturales y una jurídica (Caval) estuvieron presentes en aquella instancia judicial donde el Ministerio Público imputó delitos que iban desde infracciones tributarias hasta soborno, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y ventajas indebidas de síndico. En esta audiencia se presentaron, además, 100 declaraciones, más de 65 archivadores y miles de correos incautados como parte de los antecedentes de la investigación (T13, 2016).

Resoluciones, fallos y apelaciones

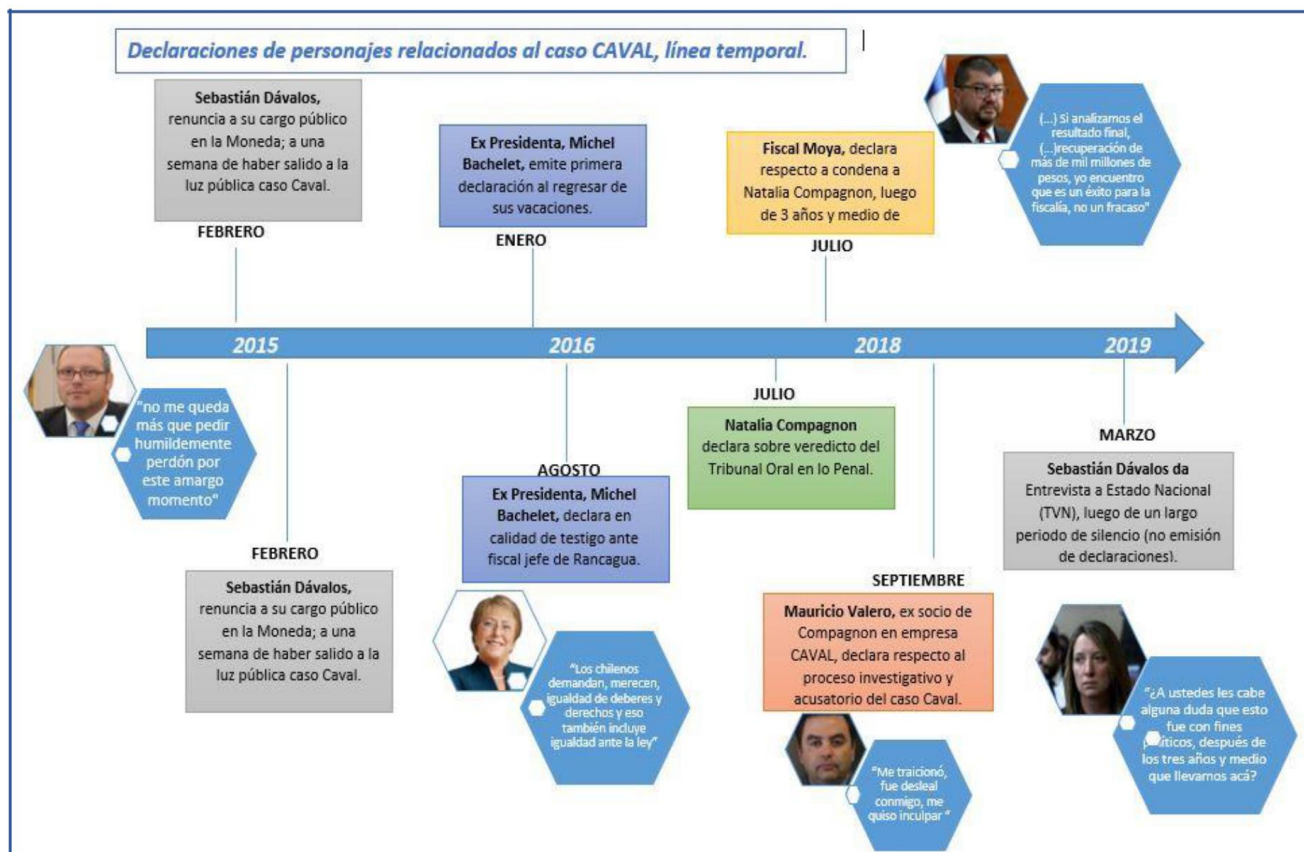
En síntesis y respecto a las primeras aristas resueltas del caso, el primer condenado fue Juan Díaz, quien aceptó haber pagado reiteradamente sobornos a funcionarios de la municipalidad de Machalí. El segundo condenado fue Jorge Silva, ex Director de Obras del municipio de Machalí, por recibir dineros para tramitar el cambio de uso de suelo de los terrenos (Cooperativa, 2018). A Sebastián Dávalos nunca se le formalizó. Tras 4 intentos por ser sobreseído, finalmente el 2 de enero de 2018 la Justicia falló a su favor. (El Mostrador, 2018).

A Caval se le formalizó por pago de sobornos. Una peor suerte corrió Valero, socio de Natalia Compagnon, quien fue formalizado por pago de sobornos que presuntamente habrían posibilitado el delito de cohecho por parte de varios funcionarios del municipio de Machalí (La Tercera, 2019).

Con fecha 11 de julio de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Natalia Compagnon por le emisión de Boletas ideológicamente falsas. La condena equivale a 541 días de presidio menor en su grado medio, como autora de delitos tributarios, concediéndosele la pena sustitutiva de remisión condicional, ordenándosele además el pago de una (\$23 millones aproximadamente) y la suspensión de cargos públicos durante dicho tiempo (El Mercurio, 2018).

Posterior al fallo, Compagnon presentó el recurso de nulidad ante la Corte Suprema, el que fue rechazado por dicha Corte, confirmándose por parte de esta instancia la sentencia dictada por Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua en contra de Compagnon (ADN, 2018).

Por último, se presenta un cuadro resumen que sintetiza los hitos del caso y las declaraciones de parte de sus principales involucrados e involucradas:



2. Es necesario profundizar en aquellas temáticas planteadas en la revisión, problemática, debilidades del sistema normativo, crisis política asociada, etc.

Si bien en el caso Caval se han identificado como delitos la emisión de boletas ideológicamente falsas, soborno, cohecho, entre otros, existen otros ejes y consecuencias de este caso que asocian a la identificación y penalización de otros delitos y a la crisis política de que desde este hecho se gatilló en el país. Estos ejes son: Debilidad del Sistema Normativo y Penal (1), Especulación Inmobiliaria y Nepotismo (2) y Crisis Política cada uno se aborda a continuación (3).

Sistema Normativo y Penal: Con el estallido de este caso, queda en evidencia una de las debilidades normativas del sistema judicial Chileno, pues posterior al estallido del caso el sistema político tuvo como resultado la incorporación de un nuevo delito vinculado a la negociación incompatible denominado el tráfico de influencias (BCN, 2015), este se incorpora al ordenamiento jurídico en el artículo 240 del Código Penal, las cuales nunca en la historia de dicho cuerpo normativo habían sido intervenidas.

Especulación Inmobiliaria y Nepotismo: Como se describió, una de las aristas del caso Caval comprende la reventa de terrenos por un valor de \$9.500 millones, además de un posible uso de influencias, lo que tiene fuerte relación con los cambios en el Plan Regulador de la comuna de Machalí que se suponía estaba en proceso. En este sentido, se acusa la existencia de especulación inmobiliaria, por usar información privilegiada para alterar la plusvalía de cuatro terrenos a conveniencia de la empresa Caval.

Respecto del Nepotismo, se acusa de la existencia de esta acción dada la influencia ejercida por la nuera de la Presidenta Bachelet para conseguir un crédito bancario sin cumplir con el conducto, procedimientos, requisitos y plazos establecidos. En este sentido, surge cuestionamiento social, político y jurídico entorno a la conducta de Compagnon y Dávalos al hacer uso de posición y poder para conseguir los recursos que la empresa CAVAL requería.

Crisis Política: Se suma, como otra de las consecuencias devenidas del estallido del caso Caval, **la crisis política y de las Instituciones** que surge a partir de este hecho y que impacta directamente en la popularidad y legitimidad del segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria. En mayo del año 2015, apenas dos meses posteriores a la publicación del reportaje mediante el cual se da a conocer el caso, la desaprobación del Gobierno alcanza un 64%, siendo esta cifra la tercera mayor desaprobación que haya tenido un gobierno en 15 años (La Tercera, 2015).

Este episodio, que marcó la evaluación de la Presidenta por involucrar a su nuera Natalia Compagnon y que costó la renuncia de su hijo Sebastián Dávalos a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, además de afectar la imagen de la jefa de Estado, también terminó con la gestión del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y con la renovación de todo su gabinete, incluyendo al comité político, dejando afuera de La Moneda al ex vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde y al ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y apostando por un grupo de hombres más abiertos al diálogo y a los consensos (La Tercera, 2015).

Respecto de la crisis política, el punto de quiebre de la popularidad de Bachelet fue el manejo del denominado "Caso Caval". Si bien esta crisis política no puso en peligro la estabilidad del régimen democrático en Chile, tuvo un directo impacto en el crecimiento de la desafección cívica y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, generándose un descontento masivo tanto con el Gobierno de turno, como con la generalidad de los actores políticos institucionales (BBC, 2015).

3. Sintetizar las principales propuestas de mejora asociadas al caso. Estas propuestas deben contribuir a mejorar los controles y reducir las posibilidades de reincidencia.

A continuación, se exponen a través de dos pilares, controles y la reducción de la posibilidad de reincidencia, mecanismos y normas que permiten asegurar que dicho caso no vuelva a ocurrir.

En cuanto a los controles:

- 1) Incompatibilidades para el ejercicio de funciones públicas:** Se propone, aumentar las incompatibilidades para el ejercicio de funciones pública se debe establecer que todas las autoridades de instituciones estatales con facultades normativas y fiscalizadoras, además de ministros y subsecretarios, no puedan emplearse, proveer servicios ni mantener vínculos

comerciales al cese de sus funciones, a esto se suma El Fiscal Nacional y los fiscales regionales y el Contralor General de la República no podrán postular a cargos de elección popular hasta dos años luego de haber cesado en el cargo.

2) Prevención de la Corrupción en la Planificación Territorial: El documento emanado por el Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, señala en esta materia propone 4 ejes:

- a. **Regulación Urbana:** Es decir, perfeccionar los instrumentos de ordenación territorial, haciendo referencia en la publicación de la toma de decisiones.
- b. **Plusvalías Generadas por el Estado:** Se debe Estudiar medidas que permitan que el Estado capture una mayor parte de las ganancias asociadas a su propia acción y Aumentar las instancias de participación ciudadana durante los procesos en que se realicen cambios en los planos reguladores.
- c. **Plazos indefinidos en la práctica:** El Director de Obras Municipales debe fundamentar sus decisiones en razón de las causales específicas y a fin de no retrasar inversiones planificadas con anterioridad.

3) En cuanto al Nepotismo: La regulación del Nepotismo, se encuentra en proceso de actualización pues en el actual gobierno se firmó el proyecto de ley de Integridad Pública, dicho proyecto de ley “prevenir y regular los conflictos de interés en el ejercicio de la función pública en los órganos de la Administración del Estado” (Servicio Civil, 2018).

Frente a la reducción de las Posibilidades de Reincidencia:

- 1) **El Tráfico de influencia** se incorporó recientemente al ordenamiento jurídico Chileno -dado el revuelo del caso estudiado- se encuentra contenido en el artículo 240 bis del Código Penal, entendiéndose al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses²².
- 2) **Declaraciones de Patrimonio e Intereses:** Es un mecanismo por el cual tiene por finalidad dejar constancia pública de los intereses que eventualmente pudieran restarles imparcialidad a las autoridades en relación a los asuntos en que deban intervenir en razón de sus funciones (Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, 2015). Se debe exigir y transparentar de forma activa el patrimonio e intereses

² Artículo 240 BIS, Código Procesal Penal

de la autoridad hasta el 4to nivel de consanguinidad y afinidad respecto a la persona que detenta funciones públicas, esto con motivo de evitar posibles conflictos en cuanto a la toma de decisiones, ya que dado el caso que no se declare el conflicto se tiene como resultado, un sesgo respecto a la decisión implementada.

- 3) **Fortalecer la Ley 20.730 de Lobby:** Dicha instancia debe avanzar hacia mayor transparencia en la función pública, esto con el objetivo de transparentar los intereses de grupos que inciden en el acontecer nacional, dicho control debe estar publicado en un sitio web único que agrupe la totalidad de la Administración del Estado, pues es necesario tener instancias de transparencia en la totalidad de poderes del Estado.

Referencias

- 24Horas.cl (Dirección). (2015). *Para comprender el Caso Caval* [Película].
- ADN. (18 de octubre de 2018). Caso Caval: Corte Suprema ratificó sentencia contra Natalia Compagnon. Santiago, Región Metropolitana, Chile.
- BBC. (07 de mayo de 2015). Cómo llegó Chile a la crisis política que terminó con la salida de todos sus ministros. *BBC - Mundo*, pág. 1.
- BCN. (31 de marzo de 2015). *Biblioteca del Congreso Nacional*. Obtenido de Cámara de Diputados:
<https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=5031>
- Cancino Martínez, R. A., & Orellana Parra, C. d. (2015). *Analizar el efecto en os resultados económicos de los casos más significativos de incumplimiento legal y éticopor parte de las empresas chilenas en los últimos 10 años*. Universidad de Bío-Bío, Facultad de Ciencias empresariales, Chillán.
- CIPER. (26 de febrero de 2015). *El historial financiero de CAVAL: el meteórico ascenso de la empresa de Compagnon y Dávalos*. Obtenido de <https://ciperchile.cl/2015/02/26/el-historial-financiero-de-caval-el-meteorico-ascenso-de-la-empresa-de-compagnon-y-davalos/>
- Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. (abril de 2015). *Consejo Anti Corrupción*. Obtenido de Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción: www.consejoanticorruccion.cl/informe
- Cooperativa. (11 de julio de 2018). Compagnon tras ser condenada: No cabe duda de que el caso Caval tuvo fines políticos. Santiago, Región Metropolitana, Chile.
- El Mercurio. (24 de julio de 2018). Caso Caval: Natalia Compagnon es condenada a 541 días de pena remitida y el pago de una multa. *El Mercurio*, pág. 1.

- El Mostrador. (06 de febrero de 2015). *Banco de Luksic otorga crédito por \$6.500 millones a nuera de Bachelet un día después de ganar la elección*. Obtenido de El mostrador: <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/02/06/banco-de-los-luksic-otorga-credito-por-6500-millones-a-nuera-de-bachelet-un-dia-despues-de-ganar-la-eleccion/>
- El Mostrador. (16 de mayo de 2018). *Caso Caval: Dávalos zafa en tribunales por delito de cohecho pero no logra sobreseimiento en arista por estafa*. *El Mostrador*, pág. 1.
- Emol. (09 de febrero de 2015). *Caso Caval: Minvu aclara detalle del cambio al plano regulador de la VI región*. Obtenido de Emol: <https://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/09/702938/plan-regulador-y-davalos.html>
- Gaggero, R. (28 de febrero de 2015). *Fiscalía investiga cuestionado estudio de cambio de uso de suelo en Machalí que benefició a Caval*. Obtenido de El Librero: <https://ellibero.cl/actualidad/fiscalia-investiga-cuestionado-estudio-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-machali-que-beneficio-a-caval/>
- Godoy, M. (15 de febrero de 2015). *El Caso Caval explicado con manzanitas: I caso que remeció a la familia presidencial y erosionó la popularidad de la ex Presidenta Bachelet. Esta es la historia de su hijo, su nuera y un negocio cuestionable*. Santiago, Chile. Obtenido de <https://conmanzanitas.com/2015/02/16/el-caso-caval-explicado-con-manzanitas/>
- Herman, P. (06 de febrero de 2016). *Raras Prácticas en el Caso Caval*. Obtenido de ANIN: <https://www.anin.cl/nota/67/15048/raras-pr%C3%A1cticas-caso-caval>
- La Tercera. (21 de mayo de 2015). *Caso Caval, crisis política y cifras negras: El 21 de mayo más complicado de Bachelet*. *La Tercera*, pág. 1. Obtenido de <https://www.latercera.com/noticia/caso-caval-crisis-politica-y-cifras-negras-el-21-de-mayo-mas-complicado-de-bachelet/>
- La Tercera. (09 de febrero de 2019). *Las causas abiertas de los protagonistas del caso Caval*. *La Tercera*, pág. 1.
- Liencura, J. (09 de marzo de 2015). *A todo esto, ¿qué es el Caso Caval?*. Obtenido de Publimetro: <https://www.publimetro.cl/cl/politica/2015/03/09/esto-que-caso-caval.html>
- Revista Qué Pasa. (5 de febrero de 2015). *www.quepasa.cl*. Obtenido de <http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml/>
- Servicio Civil. (23 de julio de 2018). *Servicio Civil*. Obtenido de Proyecto de ley Integridad Pública: <https://www.serviciocivil.cl/noticias/servicio-civil/proyecto-de-ley-de-integridad-publica/>

- T13. (29 de enero de 2016). *T13*. Obtenido de <https://www.t13.cl/noticia/politica/caval-cronologia-del-caso-formalizara-nuera-bachelet>

5. “Fraude en Carabineros de Chile”

Estudiantes: Aldo Gómez
Vania Oyarzún
Fernanda Rivera
Celso Silva
Vania Soto

1. Síntesis

El caso de corrupción “Fraude en Carabineros”, se trata de que entre los años 2006 y 2017 funcionarios públicos de distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, a quienes correspondía, entre otras tareas, la custodia de caudales públicos de dicha institución, se organizaron para sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustrajeran, abusando de las facultades de custodia y administración que ejercían en sus respectivos cargos y funciones, aprovechándose de sus distintas posiciones, conocimientos especiales e información relevante, que tenían en razón de los cargos que ejercían en Carabineros de Chile, lo que además les permitió eludir por años los controles internos y externos sobre tales recursos públicos (Poder Judicial, 2019).

Asimismo, en estos hechos también intervinieron civiles imputados que, conociendo la calidad de funcionarios públicos y las funciones que ejercían sus coimputados, y concertados con éstos, facilitaron los medios para que se concretara la sustracción de caudales públicos por una suma total que en sus inicios se hablaba de 8 mil millones de pesos defraudados, pero que a la fecha asciende a \$28.348.928.198 (Poder Judicial, 2019).

El hecho se dio a conocer por medio de un funcionario de Banco Estado de Punta Arenas, quien detectó movimientos irregulares en la cuenta corriente del Capitán Felipe Ávila, jefe de la SIAT de la ciudad durante tres años (24 Horas, 2017). En la remuneración del Capitán Felipe Ávila constaban millonarias sumas que fueron informadas a la unidad de análisis financiero, entidad que prendió la alerta en el robo de las arcas fiscales.

Los movimientos se habían gestado hace más de cinco años, desde una de las cuentas corrientes de remuneraciones de Carabineros, donde se administran 65 mil millones de pesos mensuales. Un oficial transfirió montos de hasta 300 millones del capitán Ávila, quien una vez con el dinero en su poder, la repartía entre los “beneficiados”, pertenecientes a la institución. Estas acciones se lograron llevar a cabo porque las maniobras de desfaldo hicieron que en los registros internos de finanzas nunca aparecieran los montos transferidos a las cuentas personales (24 Horas, 2017). Los delitos base de lavado de dinero para este caso, fueron los delitos reiterados de malversación de caudales públicos.

La forma de operar diseñada e implementada por los carabineros en cuestión fue a través de distintas modalidades las cuales se componían de las siguientes fases o etapas:

1. Identificación de vulnerabilidades o debilidades en la implementación de controles internos al interior de la institución, relacionados con la disponibilidad financiera.
2. Análisis de los recursos o caudales susceptibles de ser sustraídos.
3. Planificación y elaboración de maniobras informáticas, financieras y/o contables, a través de las cuales poder sustraer dineros desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, implementando sistemas vulnerables a manipulaciones o vulnerando los sistemas de control existentes, falsificando instrumentos públicos y privados, alterando registros contables, entre otras maniobras encaminadas a la concreción de los fines ilícitos de la organización criminal.
4. Identificación de personas que ocupen cargos o desempeñen funciones útiles para llevar a cabo las maniobras descritas, tendientes a la concreción de los fines de la organización

criminal, incluyendo el reclutamiento de testaferros que faciliten la ejecución de dichos fines.

5. Ejecución del plan criminal mediante la realización de maniobras y actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de carabineros de Chile, a través de distintas modalidades.
6. Fraccionamiento y distribución de parte del dinero sustraído: Los receptores de los montos sustraídos debían fraccionar y distribuir el dinero entre miembros de la organización, mediante la emisión y entrega de cheques en blanco, transferencias bancarias, depósitos, vale vista o retirando el dinero de las cuentas para luego entregarlo en efectivo.
7. Realización de inversiones con las ganancias ilícitamente obtenidas, además de la constitución y/o utilización de personas jurídicas. Los miembros de la organización ocultaban o disimulaban el origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos producto de la malversación de caudales públicos, para lo que utilizaban diversas formas tales como; adquirir inversiones a nombre propio o de terceras personas, realizar un proceso de estratificación de los montos, entre otros.
8. Identificación y captación de personas que pasarían a sustituir en sus funciones a los miembros de la organización criminal que dejaran de formar parte de la misma o de la institución de carabineros de Chile, asegurando de esta manera la permanencia en el tiempo y la continuidad en el funcionamiento de la misma (Poder Judicial, 2019).

Para el marzo del 2017 estos hechos comienzan a deslumbrar en la esfera de opinión pública a raíz de las declaraciones del General Director Bruno Villalobos y a la investigación que se estaba sometiendo la institución por parte del Ministerio Público, organismo que dictó como principal medida “el retiro de la institución a un total de 9 de ellos, en lo que va de la investigación, esto puede originar un mayor número de personas que se retiren de la misma, de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el proceso investigativo” (Comisión Investigadora, 2019). En paralelo para abril del 2017, la Cámara de Diputados aprueba la creación de una Comisión Investigadora con el fin de establecer responsabilidad administrativa para los altos cargos.

Fiscalía cerró la investigación en marzo del 2019 con un total de 136 personas formalizadas y un total de 180 indagados (CNN, 2019) 35 pertenecen a la causa “madre” y, según fuentes del caso, serán a quienes la Fiscalía buscará llevar a juicio oral, se les imputa asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos y, en algunos casos, también falsificación de instrumento público.

El Poder Judicial formaliza a seis personas, siendo los primeros seis condenados en el llamado popularmente “Pacogate”, por lo que el fiscal Eugenio Campos pidió penas de tres años y un día de cárcel para los involucrados por malversación de caudales públicos. Junto con ello, pidió la incautación de bienes y propiedades, donde destaca una vivienda de 100 millones de pesos (El Dinamo, 2019). Las seis personas acusadas anteriormente ocupaban cargos de Teniente Coronel de Carabineros de la especialidad de Intendencia de la institución (Héctor Ivan Concha Jaramillo), Suboficial Mayor de Carabineros (Nolberto Enrique Rivas Lobos), Coronel de la especialidad de Intendencia (José Manuel Valenzuela López), además de un Suboficial en retiro (Rolando Eugenio Sanzana Chávez), un ex teniente en retiro de la especialidad de la Intendencia (Oscar Eduardo Muñoz Becerra) y un civil (Gonzalo Renan Carrasco Quintana).

No obstante, estas personas no son las únicas involucradas en el caso por lo que se espera que otros involucrados, para la fecha de 18 de junio del 2019 se ha sentenciado a catorce civiles (Angel Rivera, Arnaldo Pasten, Cain Sáez, Carlos Abarca, Carlos González, Carlos Cifuentes, Ernesto Ramírez, Gatón Rojas, Humberto Avendaño, Jorge Bettiz, Julia Bettiz, Miguel Bettiz, Pedro Martínez y Wilma Miranda) que no son parte directamente de Carabineros de Chile, permitieron la utilización de sus cuentas bancarias por parte de terceros para recibir múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales, efectuaron una serie de actos de lavado de dinero ilícitamente obtenido, al permitir la utilización de cuentas bancarias personales o la creación de cuentas de ahorro a su nombre con los fines anteriormente señalados, cumpliendo el rol de hacer entrega de una parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal de causa en la que fueron condenados las seis personas nombradas anteriormente (Poder Judicial, 2019).

Finalmente, con relación a la separación en tres partes que se hizo del caso, y que se comenta al principio de este apartado, Fiscalía recientemente terminó de investigar y condenar una parte de este caso, por lo que se queda a la espera de las siguientes partes del fraude cometido, en relación con la condena, imputados y medidas respectivas que se tomaron.

2. Mecanismos de Control Civil y el rol de Contraloría

Cuando se habla de control civil, se habla de la prevalencia de las autoridades de la Sociedad Civil sobre las fuerzas armadas, y en este caso, Carabineros es una institución dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que según su misión institucional “le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2019). Lo anterior se entiende como que el control civil que ejerce el Ministerio del Interior es meramente administrativo y no en la totalidad de las materias que aborda Carabineros, dándole libertad política, y permitiendo que los superiores jerárquicos de la institución cuenten con un alto nivel de discrecionalidad sin control civil alguno, situación que deja desprotegida a la institución frente a casos como el presente.

Adicionalmente, al interior de la Subsecretaría del Interior, existe una División de Carabineros, cuya misión es “apoyar y asesorar al Subsecretario del Interior en todas las materias administrativas vinculadas a Carabineros de Chile y a la Dirección de Previsión de Carabineros” (Subsecretaría del Interior, 2019), que nuevamente hace foco en que el control es meramente administrativo, dejando así espacio a la discrecionalidad e independencia de los altos mandos, además de incluso dentro de esta división existe un departamento de ejecución y gestión presupuestaria, cuyo único rol es de apoyo a la ejecución de proyectos presentados por la institución de carabineros, sin ejercer algún nivel de control sobre la ejecución presupuestaria de la institución.

Por otra parte, la prensa toma como postura la existencia de relaciones institucionales cuyo rol era encubrir el fraude, esto debido a que instituciones como Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió alertas de operaciones sospechosas que decantaron en una investigación, que más tarde sería archivada en medio de un proceso de investigación que no prosperó (La Tercera, 2018).

Sin embargo, de los reportes relacionados a otras instituciones, destacan dos intervenciones de la Contraloría General de la República, institución cuya labor “es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos” (Contraloría General de la República, 2019).

En este sentido, existen reportes de dos intervenciones en las que contraloría pudo detectar el fraude, siendo la primera el año 2010, en que se instruyó un sumario al Departamento de Remuneraciones de Carabineros por el reiterado pago indebido de sueldos, sin embargo, este sumario no prosperó debido a que fue anulada, dejando sin efecto la resolución que ordenaba el inicio del sumario (La Tercera, 2018). Por otro lado, se habla de otro sumario realizado en el año 2011, sobre el uso indebido de fondos públicos, que finalizó en la restitución de los dineros sustraídos, y sin mayor profundización en el caso por parte del ente fiscalizador (La Tercera, 2018), siendo ambos antecedentes vinculados con una relación existente entre el contralor y el general de director de carabineros de esa época.

Adicionalmente, también se han dado a conocer otros antecedentes que vinculan a Contraloría, como lo es que la institución de Carabineros entregase documentos financieros falseados a la institución fiscalizadora (Tele 13, 2019), además de que desde la misma Contraloría se haya omitido información importante para el debido desarrollo de la investigación, reforzando esto último la teoría de una posible red de protección en torno a Carabineros (El Dínamo, 2018).

2.1 ¿Es un caso como este una práctica institucional?

A lo largo de este trabajo se han identificado diferentes aristas del caso de corrupción de Carabineros “Pacogate”, que se caracteriza principalmente por haberse realizado constantemente durante aproximadamente 11 años, en los que se sustrajeron grandes montos de dinero, a la vez que se involucró a más de 180 personas, lo que genera la pregunta que da nombre a esta sección del trabajo, ¿Es un caso como este una práctica institucional?

La respuesta a ésta pregunta no tiene una respuesta clara, debido a que la información a la que se ha accedido no es la información completa del caso, sin embargo, la información sobre el tiempo en el que se extendieron las malas prácticas y a la cantidad de involucrados, tanto de la misma institución como actores externos a ésta, lleva pensar que si se habla de una práctica institucional, especialmente de los altos mandos de la institución, que utilizan su poder y discrecionalidad para influir dentro de la institución en busca de obtener un beneficio privado, formando incluso redes de protección en torno a los involucrados, de forma que esto se mantuviera en secreto por el periodo de 11 años, burlando controles tanto internos como externos.

2.2 ¿Cómo reforzar el control sobre la institución?

En este sentido, cuando la práctica ya alcanza el nivel institucional, donde gran parte de los funcionarios de la institución están al tanto y trabajan en favor del resguardo de esta situación, se puede hablar de que la institución se encuentra fuertemente expuesta frente a estos casos, por lo que se vuelve importante recuperar el control sobre la institución, lo que, en este caso requiere una reforma a la institución desde el interior, además de explicitar vía legislativa que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no solo tiene un rol asesor y de control administrativo, sino que debe conformar un ente controlador al que Carabineros deba rendir cuenta no solo sobre su trabajo en terreno, y número de procedimientos en lo relativo a delitos, sino que también en lo relativo a finanzas, operaciones sospechosas, y el proceder de sus propios altos mandos.

3. Propuestas de mejoras asociadas al Caso de Fraude en Carabineros

En base al Informe de la Comisión Especial Investigadora de las irregularidades en la Gestión y Administración Financiera en Carabineros de Chile (2017) perteneciente al Boletín N°4398-11 se establecen diferentes recomendaciones que contribuyen al mejoramiento de sistemas de control y la reducción de las posibilidades de reincidencia para no se produzcan situaciones que apunten a conductas y acciones fraudulentas dentro de la organización de Carabineros. De esta manera se encuentran propuestas que se enfocan en el aseguramiento del control tanto interno como externo y el fortalecimiento del mando civil en relación a la autonomía institucional, y el establecimiento de una ética formativa consolidada tanto organizativamente como a nivel de cada funcionario.

En primer lugar, las recomendaciones que apuntan al aseguramiento del control interno corresponden a un perfeccionamiento sobre la distinción entre los gastos reservados que cuentan con documentación que los respalde y de aquellos que no pueden contar con esta documentación, por cual requerirán de una resolución fundada suscrita por el jefe superior del organismo con uno de los cuentadantes, con objeto de que se dé cuenta de cómo se están utilizando los recursos públicos.

En el caso del control externo se realizan cuatro grandes propuestas. La primera consiste en otorgar facultades para que la Contraloría General de la República pueda acceder de forma general y permanente al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) transnacional de los servicios con la finalidad de innovar y potenciar las auditorías. La segunda constituye la implementación de auditorías externas, en donde el mejoramiento constante de los procesos y análisis de los sistemas de control sea esencial en las áreas de finanzas y de similares grados de riesgo, y de la misma forma que dichas auditorías sean presentadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su plenitud con un acceso libre a la ciudadanía. La tercera consta en el perfeccionamiento en las medidas de control del Ministerio del Interior ejercidas sobre la gestión de Carabineros, a través del reforzamiento de sus funciones de supervisión y seguimiento para efectuar un control y análisis eficiente de los informes de auditoría hechos por Contraloría. La cuarta abarca disponer de procesos de control y fiscalización desde el poder legislativo, en particular, por parte de la Cámara de Diputados, esto con objeto de que los informes realizados por Contraloría y compartidos al Ministerio del Interior, también sean enviados a la Comisión de Seguridad Ciudadana de dicha Cámara.

Para ambos tipos de control, se hacen sugerencias respecto al desarrollo de nuevos mecanismos de gestión en Carabineros, específicamente el uso del Sistema ERP (Planificación de los Recursos de la Empresa), esto con el objeto de que las áreas de educación, recursos humanos, logística, finanzas y presupuestos tenga una base de datos única para aumentar la confiabilidad de la información y que se tenga un registro sobre las operaciones transadas. De esta forma, se podrían analizar los datos por medio de auditorías y realizar controles internos y externos más eficientes. A su vez, es necesario que este sistema comprenda seguimientos y evaluaciones de forma permanente para cumplir con períodos de tiempo comprometidos y que se refleje la efectividad de las distintas áreas en las que se está implementando.

Por otra parte, se realizan propuestas en torno al control civil/ mandato civil, en detalle, apuntan a un empoderamiento de las autoridades de la sociedad civil sobre la forma en que se conduce la política de desarrollo principal. La Comisión recomienda la conformación de una Comisión de Integridad Autónoma en el largo plazo, con la finalidad de gestionar información sobre la rendición de cuentas y la administración de un sistema de denuncia de carácter anónimo, que cuente con la integración de los poderes del Estado, la Contraloría General de la República y la sociedad Civil, además debe tener competencias con relación a la experiencia en finanzas,

compliance, transparencia y seguridad ciudadana, empoderan a las autoridades civiles sobre la conducción de la política de desarrollo policial.

En relación a una ética formativa consolidada, la Comisión propone mejoras que abordan el fomento y reforzamiento activo de la cultura de la probidad y transparencia en Carabineros, en donde se presente el Plan de Reestructuración de la institución como un insumo que incorpora en el sistema educacional ámbitos de gestión y control logístico, financiera y operativo, la difusión del Manual de Doctrina y Código de ética, constitución de Comités de ética en cada Alta dirección, y de Comité de Análisis Estratégico, Desarrollo, Riesgo y Ético, entre otras medidas.

Por último, en torno a la reducción de posibilidades de reincidencia se recomienda implementar un Modelo de Gestión de Riesgo consistente, integral, continuo y estructurado, esto con la finalidad de que se identifiquen previamente situaciones que puedan resultar en oportunidades o amenazas para la institución, sean evaluadas adecuadamente, se realicen mediciones sobre ellas, sean reportadas y tratadas acorde afecten los logros de Carabineros. Esto quiere decir, que es necesario la conformación de una “cultura del riesgo”, en las que se identifiquen circunstancias potenciales de riesgo, analizándolas de manera adecuada y establecer medidas de mitigación para que no se produzcan dichos eventos, o influyan de manera leve dentro de Carabineros.

Referencias

- 24 Horas. (8 de marzo de 2017). *¿Cómo se gestó el millonario fraude en Carabineros?* Obtenido de <https://www.24horas.cl/nacional/como-se-gesto-el-millonario-fraude-en-carabineros--2323041>
- CNN. (20 de marzo de 2019). *Fiscalía cierra investigación por fraude en Carabineros con 136 formalizados: Suma más de \$28 mil millones*. Obtenido de https://www.cnnchile.com/pais/fiscalia-fraude-carabineros-136-formalizados_20190320/
- Comisión Investigadora. (2019). *Informe de la Comisión especial Investigadora de las irregularidades en la gestión y administración financiera en carabineros de Chile y en relación a las actuaciones de los distintos organismos públicos en la materia*. Obtenido de <https://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37908&formato=pdf>
- Contraloría General de la República. (2019). Obtenido de <https://www.contraloria.cl/web/cgr/que-hacemos>
- El Dínamo. (5 de septiembre de 2018). *Contraloría reconoció que omitió información a comisión que investiga fraude en Carabineros*. Obtenido de <https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/05/contraloria-reconocio-que-omitio-informacion-a-comision-que-investiga-fraude-en-carabineros/>
- El Dinamo. (14 de mayo de 2019). *Ministerio Público consiguió las primeras condenas por fraude en Carabineros*. Obtenido de <https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/14/ministerio-publico-consiguio-las-primeras-condenas-por-fraude-en-carabineros/>

- La Tercera. (23 de septiembre de 2018). *Las tres alertas que pudieron evitar el millonario fraude en Carabineros*. Obtenido de <https://www.latercera.com/nacional/noticia/las-tres-alertas-pudieron-evitar-millonario-fraude-carabineros/327508/>
- Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2019). *Funciones Ministeriales*. Obtenido de <https://www.interior.gob.cl/funciones-ministeriales/>
- Poder Judicial. (17 de mayo de 2019). *FRAUDE EN CARABINEROS: 7° JUZGADO DE GARANTÍA CONDENA A SEIS POLICÍAS (R) POR MALVERSACIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS*. Obtenido de http://ipj10-110.poderjudicial.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/fraude-en-carabineros-7%C2%B0-juzgado-de-garantia-condena-a-seis-policias-r-por-malversacion-y-lavado-de-activos/pop_up?_101_INSTANCE_kv6Vdm3zNE
- Subsecretaría del Interior. (2019). *División de Carabineros*. Obtenido de <http://subinterior.gob.cl/division-de-carabineros/>
- Tele 13. (28 de abril de 2019). *Exclusivo T13: El engaño de Carabineros a la Contraloría*. Obtenido de <https://www.t13.cl/videos/nacional/exclusivo-t13-gastos-reservados-engano-contraloria>

6. Colusión de las principales empresas avícolas productoras de carne de pollo en el mercado nacional

Estudiantes: Micaela Aspe
Vicente Díaz
Danielle Giese
Katherine Saavedra
Carolina Soto

Introducción y Síntesis del Caso

A finales del año 2011 la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en su rol de agencia pública encargada de defender y promover la libre competencia de todos los sectores productivos del país (FNE, 2019), interpone un requerimiento en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra grandes productores avícolas del país: Agrícola Agrosuper S.A., Empresas Ariztía S.A., Agrícola Don Pollo Ltda, por medio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), acusadas de comportamientos contrarios a la libre competencia al ejecutar acuerdos entre ellos consistentes en la limitación de la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional (EMOL, 2011).

La situación es de carácter grave, si se tiene en consideración que dentro del mercado de la carne, la carne de pollo en el año 2010 representaba un 39% del consumo, y que las empresas involucradas, en ese mismo año concentraban un 92% de la producción de pollo destinada al mercado nacional (se excluyen las importaciones), sin embargo esta participación se reducía a 82% al considerar los productos exportados (Jiménez, 2014).

Las empresas avícolas mencionadas son acusadas por la FNE en específico, de infringir el artículo 3° del Decreto Ley N° 211 a través de la celebración de un acuerdo entre los competidores, consistente en la limitación de la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y la asignación de cuotas en el mercado de producción y comercialización del producto. Prácticas de carácter colusivo que según se identificó en la investigación datarían desde mediados de la década de los 90, llevando al menos 10 años de ejecución hasta la acusación, período en donde las empresas habrían acordado el intercambio constante de información como una iniciativa para lograr un “desarrollo razonable para el sector”. La comunicación entre los altos ejecutivos de las compañías, se realizaba vía correo electrónico y coordinada por la Asociación de Productores Avícolas de Chile APA, información que le permitió a esta última determinar anualmente la cantidad total de carne de pollo a vender en el mercado nacional por las tres compañías, asignándoles cuotas de participación en el mercado a cada una de ellas. La limitación de la cantidad transada en el mercado mayorista permitió a las compañías involucradas, rentas superiores a las que hubiesen tenido de no haber realizado estas prácticas, además bajo este escenario alterado habrían aumentado los precios del mercado minorista, afectando a los consumidores con un precio mayor (Alvear, 2019).

Sumado al requerimiento central, la FNE sumó a este, dos hechos como indicios de colusión. El primero ocurrido en el año 2009, cuando a razón de una nueva regulación sanitaria, las empresas requeridas habrían acordado un rotulado único sobre el porcentaje de marinado de la carne de pollo lo que según señala la FNE, afectaría la diferenciación de productos de diferentes marcas por parte de los consumidores. El segundo hecho es sobre la adquisición conjunta de una empresa avícola competidora, La Cartuja, situación que constituye una forma de dilución de la competencia existente en la industria.

En el año 2014 el TDLC acoge el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica y aplica sanciones a las empresas avícolas por haber conformado el cartel que controló las cuotas de producción de la industria (FNE, 2014), el fallo fue unánime dentro del tribunal, donde se señaló que las tres empresas avícolas se coordinaron a través de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA) para mantener un nivel de producción específico de carne de pollo, influyendo en la fluctuación de los precios de este producto. Sobre las sanciones a las empresas involucradas, se condenó a Agrosuper y Ariztía al pago de 30.000 UTM, mientras que a Don Pollo se le aplicó una multa de 12.000 UTM (BioBio Chile, 2014). Además se ordenó la disolución de la APA y se impuso a Agrosuper la obligación futura de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado, sanción histórica, ya que se habría aplicado la

máxima multa en dinero desde que en 2009 se aumentaron los montos para estos delitos, además que se ordena la disolución de un gremio empresarial, hecho ocurrido por primera vez desde la creación de este Tribunal,

Problemática, debilidades del sistema normativo, crisis política asociada, etc.

Luego del análisis del caso de la colusión de precios en la carne de pollo, es posible concluir que las principales problemáticas tienen sus raíces en las diferentes falencias del sistema normativa e institucional chileno. El Servicio Nacional de Consumidores (SERNAC) es la institución gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores, garantizando el cumplimiento de estos además de que los consumidores asuman como contraparte ciertos deberes. Sin embargo, el SERNAC tiene un rol orientado a sancionar a los productores que violen los derechos del consumidor, mediando entre las partes para compensar y reponer el daño provocado a los consumidores, siendo en su mayoría devoluciones de dinero o compensaciones a través del mismo medio.

En consecuencia, el problema en este caso radica en que el SERNAC, por su parte, no cuenta con los recursos ni potestades que le permitan actuar de forma preventiva, es decir, realizar intervenciones y sancionar a las empresas cuando cometan delitos asociados a la colusión. Además, organismos como este o la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tardaron varios años en descubrir y asimilar la existencia de colusión en el mercado de la carne de pollo, teniendo en cuenta que las prácticas databan desde mediados de la década de los '90s y los primeros indicios notificados son del 2009. Esto revela que hubo grandes falencias a la hora de detectar este y otros casos de colusión en los mercados chilenos, lo que da cuenta de carencias fundamentales en el alcance y la calidad de los mecanismos de fiscalización y control que se encontraban establecidos.

El sistema normativo cuenta con debilidades también en el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) al ser un organismo cuyas sanciones de tipo económica por medio de multas u obligar a compensaciones de los culpables a las víctimas (en este caso, consumidores de carne de pollo). Existen falencias también desde el punto de vista de las sanciones judiciales, puesto a que estas castigan a las personas jurídicas (a las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo) y no a las personas naturales implicadas. Por lo demás, no hubo cambios significativos en la legislación chilena que, en primer lugar, entreguen mayores potestades a los organismos fiscalizadores (SERNAC, FNE, TDLC) y, en segundo lugar, que castiguen en mayor medida a las empresas culpables de los delitos de colusión en el mercado chileno. Por ello, es que se debe analizar y cuestionar las responsabilidades penales y civiles que tiene los dueños y gestores de los actos ilícitos, con el fin de erradicar estas conductas desde la raíz del problema, imponiendo nuevos mecanismos de sanciones que garanticen el consumo justo por parte de los ciudadanos.

Por otro lado y, sobre los efectos políticos que implicó este caso, resulta necesario destacar que durante los últimos años en Chile, ha existido una crisis de confianza desde la ciudadanía y la sociedad civil con respecto a la dirección y funcionamiento las diferentes instituciones, tanto privadas como de gobierno. En consecuencia, esto ha derivado en una baja participación ciudadana en las diferentes instancias (principalmente elecciones), como también en el descontento de sectores de la población. Ya que este caso de colusión y otros como el del papel higiénico, los casos de cohecho y financiamiento ilegal y, por sobre todo, la falta de soluciones por parte de las instituciones responsables, merman la credibilidad de los ciudadanos, generando un clima de desconfianza general.

Propuestas de mejora y Conclusión.

Como se ha descrito anteriormente, la colusión de la carne de pollo se produce debido a la oligopolización del mercado por tres empresas. En donde estas coinciden en organizar un acuerdo para fijar precios de compra venta de bienes en uno o más mercados, lo cual, genera una limitación en su producción o provisión (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017). Bien, la colusión que oligopoliza la distribución del mercado limita el crecimiento del mercado en cuanto a la generación de barreras para nuevos productores y su capacidad de innovar.

La primera propuesta que permitirá mitigar las posibilidades de reincidencia y mejorar los controles, consiste en la implementación de fiscalizaciones y modificación de la ley 20.945 de 2016, esperando que ambas sean convenientes para fomentar la libre competencia. Existe evidencia empírica que permite al grupo de investigadores inferir que las instancias fiscalizadoras son beneficiosas y eficientes, pero siempre y cuando estas sean oportunas. A lo cual, se genera una crítica a la ley 20.945 en su artículo n°6, particularmente al inciso noveno, esto, debido a que una fiscalización no podrá ser oportuna ni confiables sus resultados en la medida en que un ministro suplente no tenga dedicación exclusiva al aparataje público. Ya que, este en el caso hipotético el ministro suplente al ser dueño de una empresa avícola, tendrá conflicto de intereses, donde podrá entrar en un conflicto ético en la medida que la información privilegiada que le provee el cargo de ministro le permita maximización de sus beneficios privados, afectando a su vez la libre competencia.

La segunda propuesta consiste en aumentar los montos de las multas, debido a que estas tienen un tope de 30.000 UTM (Aydin & Figueroa, 2017). La existencia de este tope genera incentivos de manera indirecta para los oligopolios/monopolios o en sí la generación de carteles colusivos en el mercado prefieran pagar la multa que abstenerse de la infracción (Deloitte, 2014, p. 17), esto, debido a que la infracciones generan utilidades mayores que las que la sanción les cobra, siendo los montos sancionatorios muy marginales respecto de todas las utilidades generadas (siendo rentable la falta a la ética en este caso, respecto de abstenerse a ella), este factor se propensa también con el hecho de que el promedio de las multas aplicadas por el TDLC, se ha mantenido sustancialmente por debajo del máximo de UTM (Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia 2012, p. 4).

Una tercera propuesta consiste en la crítica a que las sanciones aplicadas por el FNE y el TDLC fueron dirigidas a las empresas y no a los individuos, un factor que reducía el efecto disuasivo sobre quienes realmente organizan y participan en tales carteles, que tienden a ser individuos (Stephan and Nikpay, 2015). Se debe establecer responsabilidades penales para los sujetos que actúen en contra del orden jurídico. Así como en el aparataje público se fomenta la probidad y se persiguen sus faltas mediante el establecimiento de responsabilidades administrativas, se sugiere establecer criterios que fomenten el actuar intachable de los funcionarios privados, con el fin de que propicien el libre mercado dentro de sus criterios rectores.

Una cuarta propuesta podría ser la promoción de libre competencia en la sociedad y la academia. Esto entendiendo que una política anticarteles exitosa requiere de una comunicación efectiva de sus objetivos y beneficios hacia los agentes económicos y el público (Stephan, 2011). La promoción de competencia en la sociedad, la academia y entre los actores económicos (grandes y pequeños) es sumamente importante para promover el cumplimiento de las normas (Lewis, 2013). Por esta razón, la FNE debe diseñar e implementar un programa activo de promoción de competencia en la sociedad. En particular, es importante comunicar al público las expectativas que la FNE y el TDLC tienen con respecto a las nuevas sanciones contra cartelistas y las indemnizaciones.

Finalmente, una quinta propuesta, y la cual hace ya varios años está en la palestra pública, es referente al SERNAC y sus facultades, ya que como se mencionó anteriormente este no cuenta con los recursos ni potestades que le permitan actuar de forma preventiva, es decir, realizar intervenciones y sancionar a las empresas cuando cometan delitos asociados a la colusión. En este sentido, el poder mejorar y aumentar las facultades de este organismo público, dándole una potestad fiscalizadora, preventiva pero que además sea acompañada con una potestad sancionadora efectiva que permita a este organismo público realmente defender los intereses de los consumidores en nuestro país.

En definitiva, cada una de las propuestas anteriormente mencionadas pueden ser llevadas a cabo en un mediano plazo, lo que permitiría no sólo contribuir a mejorar los controles y reducir las posibilidades de reincidencia, sino que también permitiría aumentar los niveles de confianza y legitimidad de la ciudadanía, tanto para el sector público como para el sector privado, los cuales se han visto afectados por los innumerables casos de colusión en Chile.

Referencias.

- AYDIN, U., & FIGUEROA, N. (2017). Carteles: propuestas para un combate efectivo a la colusión. *Propuestas para Chile*, 87.
- Alvear, J. (25 de marzo de 2019). El Mercurio. Obtenido de El caso “pollos” y la libre competencia: <https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2019/03/25/El-caso-pollos-y-la-libre-competencia.aspx?disp=1>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2017, junio 03). *Ley Fácil*. Retrieved from Guía Legal sobre: Colusión de empresas: <https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/colusion-de-empresas>
- BioBio Chile (25 septiembre de 2014). Caso Pollos: condenan a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo a pagar millonarias multas por colusión. Recuperado de: <https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/09/25/caso-pollos-tribunal-impone-millonarias-multas-a-agrosuper-ariztia-y-don-pollo-por-colusion.shtml>
- Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, R. de C., 2012. Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia. Disponible en: <http://www.economia.cl/wp-content/uploads/2012/07/INFORME-FINAL-ENTREGADO-A-PDTE-PINERA-13-07-12.pdf> [Última visita: el 26 de junio 2015].
- Deloitte, (2014). Segundo Estudio sobre la Percepción del Efecto Disuasivo de Las Acciones de la Fiscalía Nacional Económica [online]. Santiago, Chile. Disponible en: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/Estudio_percepcion.pdf [Última visita: 1 de noviembre, 2016].
- EMOL. (01 de diciembre de 2011). [emol.com/noticias/economia](https://www.emol.com/noticias/economia). Obtenido de Fiscalía Económica acusa de colusión a productores de pollo y pide multas por US\$ 100 millones: <https://www.emol.com/noticias/economia/2011/12/01/515232/fiscalia-nacional-economica-acusa-ante-el-tdlc-a-productores-de-pollo-por-colusion.html>
- FNE (2019). Fiscalía Nacional Económica. obtenido de : <http://www.fne.gob.cl/nosotros/fne/>

- Fiscalía Nacional Económica, (2014). TDLC condenó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión y ordenó disolver el gremio que las reúne. Recuperado de: <http://www.fne.gob.cl/tdlc-condeno-a-agrosuper-ariztia-y-don-pollo-por-colusion-y-ordeno-disolver-el-gremio-que-las-reune>
- Jiménez, S. (2014). Colusión de Pollos: Un fallo Incompleto. Obtenido de Colusión de Pollos: Un fallo Incompleto: Obtenido de: <https://lyd.org/wp-content/uploads/2016/12/pp-329-349-Colusion-de-Pollos-Un-fallo-incompleto-SJimenez.pdf>
- Lewis, D. (2013). Embedding a Competition Culture: Holy Grail or Attainable Objective? En: Sokol, D. D., Cheng, T. K., and Lianos, I., eds. Competition Law and Development. Stanford, CA: Stanford University Press, 228-248.
- Stephan, A. (2011). 'The Battle for the Hearts and Minds': The Role of the Media in Treating Cartels as Criminals. En: Criminalising Cartels: Critical Studies of an International Regulatory Movement. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 381-394.
- Stephan, A. and Nikpay, A. (2015). Leniency Decision-Making from a Corporate Perspective. En: Beaton-Wells, C. and Tran, C., eds. Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary Age: Leniency Religion. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 139-158.

7. CASO PAPEL HIGIÉNICO

Estudiantes: Camila Bueno
Patricia Menéndez
Benjamín Soto
Claudio Toro

Análisis e identificación del Fraude

La llamada “Colusión del Papel Confort, más conocido como “El Cartel del Confort”, es un caso de colusión entre las dos principales empresas de papel tissue sanitario (papel elaborado a partir de pulpas mecánicas o químicas, no corrosivo ni abrasivo (EcuRed, s.f.), Compañía de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del grupo Matte, a la que pertenecen las marcas Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, y la empresa Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), compañía de origen Sueco, ex Pisa, a la que pertenecen las marcas Favorita y Magiklin. Ambas empresas representan cerca del 84,4% del mercado, con ventas anuales aproximadas a los 526 millones de dólares entre ambas (La Tercera, 2018) (datos de 2018).

Este caso se dio a conocer a fines del mes de octubre del año 2015, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento por colusión ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas mencionadas, generando un altísimo revuelo mediático en el país. Tras la investigación realizada por la FNE, y las confesiones obtenidas por parte de los principales ejecutivos de ambas empresas, se conoce que la operación del cartel tiene su comienzo en el año 2000, extendiéndose a lo menos hasta el año 2011, e involucra el papel higiénico, toallas de papel, toallas femeninas, pañales y servilletas, lo cual comprende la división de papel tissue.

Todo inicia en un contexto de competencia en los precios en el papel tissue, principalmente por la entrada de nuevos competidores al mercado, por lo cual Gabriel Ruiz-Tagle, dueño de Pisa, y Jorge Morel Bulicic, Gerente General de CMPC, se reúnen para pactar un acuerdo que les permita mantener y aumentar sus beneficios económicos. En dicha reunión se establece que se mantendrán fijas las cuotas de mercado correspondientes a 76% CMPC y 24% SCA, así como fijar precios.

Para el año 2014, alertado por casos de colusión de estas empresas y otras dedicadas a similar rubro en otros países de Sudamérica, así como las cifras de cuota de mercado y aumento en las utilidades de las empresas involucradas, la FNE decide actuar de oficio e investigar una posible colusión. Dicha investigación da como resultado la confirmación de las sospechas, ante lo cual las empresas acceden al método de delación compensada, con lo cual ambas ponen a disposición todos los antecedentes y testimonios, a cambio de rebaja o exención de multas. La primera en hacerlo fue CMPC, por lo que en principio fue exenta de multa, mientras que SCA se rebajó su multa ascendiendo ésta a los 15.5 millones de dólares (cifras de 2015). Sin embargo, finalmente CMPC debió entregar una compensación a los consumidores por un monto de 97 millones de dólares, lo que se tradujo en los famosos \$7.000 a todos los habitantes del país mayores de 18 años.

De las memorias de CMPC, informadas por La Tercera en 2011, es posible afirmar que “los ingresos de CMPC registraron una ganancia de US\$ 1.596 millones, reflejando un alza en torno a 400%, en términos nominales, con lo que crecieron alrededor de 216%” (Citado en T13, 2015). Según los cálculos del economista Germán Polanco en 2015, sumando las ganancias de CMPC por concepto de sobreprecio en el papel higiénico correspondiente a 550 millones de dólares, más el resto de su división tissue que comprende 33% del total, se llega a la cifra de 736 millones de dólares. Si a esto se suman las ganancias de SCA, el total resultante asciende al monto de 815 millones de dólares en ganancias por colusión (Citado en Diario U Chile, 2015) (cifras de 2015).

Otro estudio encargado por la FNE, encargado Marcelo Morales y Ana María Montoya, ingeniero civil de la Universidad de Chile e ingeniera comercial de la Universidad de Barcelona respectivamente en el año 2016, ajustó estas ganancias con cifras más conservadoras. Primero se usa la metodología “before-after”, la que establece que para el papel higiénico “el

sobrepromedio durante la colusión fue de 12,9% para CMPC 12,1% para SCA, sumando entre ambas un total de US\$225 millones.” (El Mostrador, 2016). Luego, usando la metodología “estructural”, se obtiene un sobrepromedio de 19% de CMPC y 35% SCA, con beneficios de 366 millones de dólares y 91,9 millones de dólares respectivamente, sumando un total de 458 millones de dólares. (El Mostrador, 2016).

Lo anterior atenta directamente a la libre competencia del mercado, ya que impide o dificulta mucho el ingreso de nuevos oferentes, lo que permite generar un monopolio que establece precios que maximizan sus utilidades, encareciendo el costo de estos productos a los consumidores. Tomando en cuenta que estos productos, en especial el papel higiénico, se incluyen dentro de la canasta con la cual se calcula el Índice de Precios del Consumidor, ya que son productos de primera necesidad y, por tanto, su demanda es relativamente inelástica, estamos ante un hecho que afecta sensiblemente la calidad de vida de todos los habitantes del país, encareciendo directamente el costo la misma, así como la calidad de los productos a los que pueden optar.

Análisis de Prensa

El caso de fraude por colusión del papel higiénico (también conocido como fraude del papel tissue) tuvo un gran impacto en la prensa y en todos los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales y especialmente en las redes sociales, las cuales fueron fundamentales para que este caso de corrupción fuera posicionándose como de gran importancia y controversia pública. En este sentido, algunos de los hitos periodísticos que evidencian los diversos antecedentes documentales de mayor relevancia son:

Colusión de papel higiénico: Fiscalía Nacional Económica presenta requerimiento por colusión contra CMPC y SCA (La Tercera, 28 de octubre)

Este hito representa a una de las primeras y principales noticias que relatan el destape mediático del caso de corrupción en torno a la colusión del papel tissue por parte de las empresas CMPC y SCA, donde se menciona que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó durante el día anterior los requerimientos, acusaciones y lista de involucrados que fueron partícipes de este fraude, investigaciones que según el mismo iniciaron en diciembre del año 2014 con la finalidad de determinar la existencia de colusión y la extensión en el tiempo de esta práctica delictiva, la cual en primera instancia ha sido efectuada entre los años 2000 y 2011. A su vez, se menciona que en el mes de septiembre la fiscalía procede a incautar material electrónico y pesquisar escuchas telefónicas de los involucrados, iniciando así uno de los procesos delictivos de mayor envergadura y conocimiento público de los últimos años, pues estas empresas acaparaban el 90% de la economía del papel, teniendo ventas por sobre los 400 millones de dólares anuales

Bachelet por colusión del papel tissue: "Me parece un hecho de la máxima gravedad (La Tercera, 29 de octubre)

Tras el revuelo comunicacional y ciudadano que causó el conocimiento público del caso de colusión económica entorno al papel tissue, la presidenta de turno de aquel momento Michelle Bachelet Jeria, apareció públicamente ante los medios dejando en claro su postura contraria y condenatoria ante este tipo de casos de corrupción, evidenciando su descontento y exigiendo los máximos castigos posibles, pues como ella menciona estos sucesos no solo afectan al país, sino que perjudican a cada uno de los habitantes del territorio, por lo que a su vez menciona la necesidad de acelerar los trámites legislativos de la nueva ley anti colusión, la cual considera como principal mecanismo para acabar con este tipo de abusos económicos.

Cómo funcionaba la colusión del mercado del papel tissue que fue destapada por la FNE (La Tercera, 29 de octubre)

Este artículo efectúa una investigación a fondo sobre la forma en que operaban las empresas CMPC (Grupo Matte) y SCA Chile (Ex Grupo Pisa) para ejecutar un plan de colusión de precios, el cual se estableció mediante encuentros esporádicos, además de contactos vía líneas telefónica privadas de prepago para que no se hicieran rastreos a sus llamadas o mensajes, en donde fijaban los precios de los productos y los sugeridos que debían entregar a las empresas del retail. Asimismo, se menciona a los principales gerentes involucrados en el fraude y el contacto por más de una década que mantuvieron las empresas para efectuar este delito económico, que según diversos medios inicia en el año 2000 como una forma de protección ante el ingreso de nuevas marcas al mercado del papel.

El "cartel del confort": el papel higiénico que ensucia la imagen empresarial en Chile (24horas, 30 de octubre 2015)

En este reportaje de Pamela Molina, se registra el revuelo virtual y mediático de carácter nacional y mundial que ha suscitado la colusión entre las empresas CMPC y SCA Chile, dando a entender que es uno de los escándalos más grandes del último tiempo, debido a la cantidad de años y dinero que les generó la colusión a estas empresas, ocasionando este hecho una serie de burlas y dichos despectivos en redes sociales y encuestas virtuales contra las grandes empresas del país, puesto que según este medio la ciudadanía refleja en estas empresas la práctica habitual del sector privado chileno, aumentando el descontento ante estas situaciones, la reprobación, desconfianza e incredulidad a los valores que dicen tener en público, lo cual generó una difamación de grandes proporciones a la imagen pública del sector empresarial chileno.

CMPC Tissue aumentó en 400% sus ingresos en los 12 años de colusión (La Tercera, 07 de noviembre)

Después de conocerse públicamente el modo de operar de estas empresas y la cantidad de años que efectuaron el fraude colectivo por colusión a la ciudadanía, este medio periodístico realizó diversas indagaciones para lograr visibilizar cuáles fueron las posibles ganancias extras que obtuvieron CMPC y SCA Chile mediante sus años de fraude, logrando obtener que poseían cerca de 350 - 400 millones de dólares anuales en ventas durante ese periodo, lo cual reflejó un aumento nominal de un 400% y real del 216% de sus ingresos habituales según un estudio de sus registros históricos, lo cual generó un aumento en las críticas y de la percepción de inseguridad y desconfianza a las grandes empresas.

Fraude por colusión de grupo Matte y SCA alcanzaría los 800 millones de dólares (Radio Uchile, 16 de noviembre 2015)

Ante los constantes estudios de los medios periodísticos del país respecto a los montos reales del fraude que efectuaron, la Radio Uchile se contactó con Germán Polanco que es un prestigioso ingeniero, economista y analista del país para conversar sobre cuáles fueron los verdaderos alcances económicos de esta colusión, a lo cual se concluye que en efecto sus ganancias han sido exorbitantes y que no se puede asegurar el monto exacto, pero si el mínimo, lo que podría dar a la audiencia y el país una idea de la proporción del fraude, el cual según el economista es superior a los 800 millones de dólares, sabiéndose así el mínimo pero no el máximo, pues según el mismo el monto real podría ser muy superior a dicha cifra pero que en efecto nunca se sabrá a no ser de que alguna de las partes filtre sus ganancias gracias a este fraude, el cual perduró por más de una década.

FNE indagó rol de Kimberly Clark en colusión del tissue (La Tercera, 25 de noviembre)

Tras todo el revuelo que suscitó el conocimiento del ilícito entre ambas empresas ya mencionadas, la FNE comenzó a indagar otras aristas que tenían ribetes de carácter internacional, pues Kimberly Clark quién es una reconocida gerenta empresarial de Tecnosur a nivel sudamericano, mantuvo reuniones con gerentes de ambas industrias papeleras en Colombia y Perú, lo cual a posterior daría cuenta de que no solamente hubo una colusión en Chile, sino más bien en otros países con la intención de posicionar a sus marcas en el mercado latinoamericano del papel higiénico y de la venta de pañales, lo cual causó gran descontento en distintos países hispanoamericanos debido a los alcances socioeconómicas y territoriales de la colusión que en los años posteriores fue afirmada por todos sus involucrados, siendo un suceso ilícito que marco profundamente la imagen de la industria chilena a nivel nacional.

A modo de conclusión, es preciso mencionar que, a pesar de la amplia cobertura periodística y radial sobre el tema, causó especial atención la nula existencia de noticias respecto a la colusión por parte de El Mercurio, sobre todo por su gran relevancia y presencia en el país. Asimismo, cabe decir que los principales periodos noticiosos al respecto fluctúan entre octubre y noviembre del año 2015, donde se descubre, investiga e inculpa públicamente a los principales involucrados en el fraude del papel higiénico, que a posterior ocasionaría la suma urgencia y aprobación de la “Ley Anticolusión” que rige actualmente en el país.

Análisis judicial: fallos y apelaciones en tribunales.

En virtud de todos los antecedentes entregados previamente, es posible visualizar en primera instancia que el organismo encargado de llevar a cabo las denuncias y pericias judiciales ante el Tribunal de defensa de la libre competencia (TDLC) correspondió a la Fiscalía Nacional Económica, quién mediante la recopilación y revisión de una serie de antecedentes ilícitos de carácter anticompetitivo logro configurar la existencia de una colusión por fijación de precios entre el grupo SCA Chile y CMPC. En este sentido, la FNE se encargó de desarrollar las solicitudes de condena para las empresas, las cuales constaban de pena monetarias que ascendían a 20.000 UTM debido a la gravedad de los hechos y amplios réditos que obtuvo mediante la colusión.

En relación a lo anterior, SCA Chile solicitó una reducción de la multa pecuniaria establecida, apelando en sus alegatos que en base al mecanismo de delación compensada (antigua ley que reducía las penas a quienes colaboren durante los peritajes), debieran haberlos eximido del pago debido a que aportaron y estuvieron dispuestos a colaborar entregando información y antecedentes relevantes para el desarrollo de la investigación de la FNE. A su vez, el grupo SCA apela que quien organiza la colusión corresponde a CMPC catalogando a ésta como el principal artífice en el delito económico, hecho por el cual menciona que CMPC no debiese ser eximido del pago de la multa, pues según su defensa éstos fueron los principales beneficiados.

En vista de los alegatos y colaboraciones de ambas empresas, la FNE declara y solicita a la corte suprema que se exente de toda multa a CMPC por ser la primera empresa en auto denunciarse y apoyar el proceso de investigación, asimismo se pide una reducción en la multa a SCA Chile debido a que de igual forma colaboró en el proceso de investigación, sin embargo los tribunales de justicia fallaron en contra de SCA, por lo cual tuvieron que pagar en su totalidad la multa propuesta en primera instancia (20.000 UTM), y al mismo tiempo acogió la demanda de la fiscalía de librar del castigo pecuniario a CMPC por su disposición a aportar en el proceso judicial (FNE, 2017).

Análisis de alegatos y defensas públicas de los acusados

Como ya fue descrito anteriormente, la investigación de la colusión fue fructífera en gran parte debido a que los involucrados se acogieron a la delación compensada, de modo que fue posible extraer antecedentes vitales de primera fuente para dilucidar o intentar dilucidar verídicamente este delito. Este proceso, sin embargo, no fue simultáneo por parte de ambas empresas, sino que CMPC se delató unos meses antes, y luego de ser dado a conocer el caso públicamente, SCA decidió tomar el mismo camino.

En este sentido, la versión que entregó CMPC a través de sus principales ejecutivos involucrados en el caso, tales como Jorge Morel, afirmaban que la colusión había tenido su inicio en el año 2000, extendiéndose hasta el 2010. En estas declaraciones, los únicos culpables son los ejecutivos, dejando fuera la participación de la familia Matte, dueña de CMPC, así como al ex Gerente General de CMPC, Arturo Mackenna, tal como consigna la declaración de Morel ante la FNE en 2015, cuando afirma que “No, no supieron y no supieron porque yo sabía que era delicado el tema. Entonces nadie me preguntó” (Citado en The Clinic, 2016). La versión que da Mackenna concuerda con estas declaraciones, ya que en el año 2017 afirmó que “Todo lo que se dijo de mí era falso. (...) Siempre tuve la conciencia tranquila, porque yo no fui parte de eso.” (Citado en La Tercera, 2017). Además, lamentó profundamente los perjuicios sufridos por la empresa. Por su parte, Eliodoro Matte, parte del directorio de CMPC en el periodo de la colusión, en su carta de despedida tras su renuncia en marzo de 2016 aseguró que “tenemos la tranquilidad de haber actuado de manera totalmente transparente y siempre con la verdad. Nunca sospechamos que algo así había sucedido” (Citado en El Mostrador, 2016). A la vez, se mostró satisfecho de la manera en que la empresa la situación. En cuanto a otro integrante del clan Matte, Bernardo Matte Larraín, director actual de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), y que participó como ejecutivo en CMPC, concordó con el desconocimiento que se tenía de la situación desde la directiva, argumentando en una entrevista televisiva de 2017 que “no había ningún indicador objetivo entre los que se analiza en un directorio que diera cuenta de que estuviera ocurriendo un hecho como ese” (Citado en El Desconcierto, 2017).

En cuanto a la participación que tuvo el ex dueño de PISA, Gabriel Ruiz-Tagle, Morel confiesa en 2015 haberse reunido con él en el Club Las Brisas de Chicureo, encuentro en los cuales afirma que “acordamos intentar volver a las participaciones de mercado del negocio anteriores a la guerra de precios y que eran de 76% para nosotros y 24% para ellos, sin considerar a Kimberly Clark, u otros pequeños” (Citado en The Clinic, 2016). Sin embargo, en un encuentro cara a cara entre ambos en el Tribunal de Letras de Colina, antes que la Corte Suprema negara el acceso a la investigación al Ministerio Público, Morel cambia esta versión, o más bien no ratifica la participación de Ruiz-Tagle. En este encuentro, Morel señala que “acordamos intentar volver a las participaciones de mercado del negocio anteriores a la guerra de precios y que eran de 76% para nosotros y 24% para ellos, sin considerar a Kimberly Clark, u otros pequeños” (Citado en El Mostrador, 2017).

Por su parte SCA (Ex pisa) en el proceso de juicios, el abogado de SCA Chile, José Joaquín Ugarte Vial declaró que CMPC “Manejaba los precios de Pisa a nuestras espaldas. CMPC definía las fechas de alza. Señoría, establecía calendarios. Esto es impresionante” (Citado en El mercurio, 2017), eso en el marco de que la culpabilidad y responsabilidad fuera toda de CMPC. Por otra parte, SCA afirma que la colusión había empezado en marzo de 2006 y habría finalizado el 2011, descartando la tesis de la Fiscalía Nacional Económica y de CMPC que habían dado a conocer que el acuerdo habría sido entre el año 2000 y el año 2011. Las versiones se contraponen, esto quiere decir que alguien estaba mintiendo. A su vez, Ugarte Vial señaló que CMPC también controló ilícitamente el mercado de las marcas propias que estaban arribando al mercado nacional a través de esta colusión con D&S y las despotenció en forma inmediata. Ugarte Vial

indicó que esto se generó por el rechazo que, en su momento, efectuó Pisa para subir el precio de su producto Acuenta tras una petición de CMPC. "Si no pudieron con el competidor, se fueron con la "madre del cordero", que en ese momento era D&S. Era el retail más grande del país" (Citado en Economía y negocios, 2017).

Sumado a esto, José Joaquín Ugarte Vial pidió al tribunal que se exima a SCA Chile de toda multa y que se tenga a la empresa como la primera delatora en el caso por la coacción de que fue objeto por parte de la Papelera, el profesional insistió en defender la tesis de que SCA Chile fue forzada por CMPC Tissue para coludirse en el mercado del tissue. Ugarte Vial acusó que el período de la colusión fue una de las etapas más difíciles para la compañía, en términos económicos. Asimismo, el abogado de la firma de capitales suecos se preguntó: "¿Quién acuerda voluntariamente una colusión si los resultados económicos serán peores que antes? Va contra toda lógica" (Citado en Economía y negocios, 2017).

Fin del proceso judicial e inicio de la compensación colectiva

Una vez efectuados los juicios correspondientes a la resolución del monto pecuniario a pagar por las empresas coludidas, el SERNAC en conjunto con las organizaciones ciudadanas ODECUS y CONACUS consolidaron una demanda colectiva en contra de SCA y CMPC por exceso de precios a bienes de consumo básico que dan por hecho el deber de las empresas a devolver ese en cierta grado mediante una compensación justa y que retribuya a los principales afectados, en este caso los consumidores. Todo ello oficializándose judicialmente en abril de 2017, teniendo diversos procesos que se proceden a explicar a continuación (SERNAC, 2017).

"Inadmisibilidad de la demanda", tras un periodo de revisión de la mediación colectiva que solicito SERNAC como ente garante de la protección ciudadana, la corte de apelaciones de Santiago dictamino en julio del mismo que sus denuncias no cumplían con la normativa por lo que eran desestimadas la entidad competente.

"Lobby judicial y posterior acogimiento de la denuncia", por meses las organizaciones litigantes continuaron con la demanda e insistieron en su presunta admisibilidad, por lo que mediante diversos reportes técnicos pujaron por una intervención de la corte suprema para que esta en su labor de entidad fiscalizadora y garante de la justicia dictaminara si procedía a denuncia o definitivamente era inamisible, siendo su punto de inflexión en diciembre del mismo año, cuando la institución judicial suprema revoco la sentencia del tribunal ordinario impugnándola por insuficiente y debido a la completa demanda colectiva efectuada, la cual pudo avanzar y proceder con el juicio.

"Compensación", un tiempo después del acogimiento de la demanda por parte de la corte suprema, esta misma falla a favor de los demandantes y evoca a las empresas SCA y CMPC a efectuar un reembolso a todos los chilenos mayores de 18 años (residentes en territorio nacional) por un monto de \$7.000, lo cual se transformó en un triunfo histórico para SERNAC y la ciudadanía, pues el monto de compensación ascendió a más 97 mil millones de pesos (equivalente a 150 millones de dólares) en su totalidad, lo que suscito un antes y un después judicial en el país, puesto que no existían precedentes sobre fallos de tal magnitud.

"Proceso de cancelación", ya dirimidos los fallos y establecidos los acuerdos monetarios, las empresas procedieron a la entrega de los dineros a las arcas del Estado para que esta las repartiera a los chilenos desde agosto del 2018, efectuando pagos automáticos a todos los clientes del Banco Estado y por apellido a quienes no pertenecieran a mencionada institución bancaria, previa inscripción para su retiro en las sucursales del IPS. Cabe recalcar que quienes

no estaban afiliados al Banco Estado, pero si eran beneficiarios de liquidaciones pagadas en el IPS, automáticamente este monto se les cargo en su cuenta para ser retirada en su próxima liquidación.

Esta resolución favoreció a miles de chilenos, quienes a pesar del bajo monto retribuido valoraron la labor efectuada por SERNAC y la serie de organismo demandantes, lo cual demostró la necesidad de que este servicio adquiriera relevancia y poder ante estos casos, convirtiéndose por antonomasia en el organismo encargado de proteger a todos los habitantes del país ante casos de este tipo o similares. Asimismo, obtuvo principal fijación pública la actitud de las empresas ante el fallo, donde CMPC aceptó toda recriminación y castigo económico, efectuando de inmediato el traspaso lo que fue visto como una “colaboración” ante los años de fraude, sin embargo, causó resquemores debido a que pudo ser un acto de “limpieza de imagen”. Por contraparte, SCA Chile se negó y opuso en primera instancia a este fallo, justificando su descontento ante esta resolución producto de la multa ya efectuada con anterioridad, lo que terminó por catapultar la visión pública de la empresa, la que finalmente tuvo que de igual forma acatar el dictamen judicial (SERNAC, 2017).

Opinión sobre el fallo judicial

Los fallos mencionados previamente, han sido del todo insuficientes, pues las penas impuestas a las empresas coludidas fueron inferior al beneficio obtenido mediante réditos económicos de estas empresas. Ello junto con otros casos de colusión, dan cuenta que el alcance que posee el Estado en materias de regulación para hacer frente a estos casos, ya sea través de sus leyes o sanciones es inefectivo, pues al no existir penas de cárcel asociada a estos delitos es visto por parte de la ciudadanía como un abuso reiterado del cual las empresas pueden ser partícipes constantemente, pues el hecho de pertenecer a cierto cartel e ir en contra de las imposiciones de la ley es más rentable que sumarse a la libre competencia, pues las ganancias son ampliamente mayores a las “pérdidas” que tendrían en caso de ser descubiertas, pues en efecto la empresa SCA Chile tuvo ingreso por más de 4.400 millones de dólares durante los años de colusión, cifra que es muy superior a los 18.3 millones de dólares con las que fueron sancionadas por el tribunal económico (Cooperativa, 2017).

Esto último puede generar que otras empresas que se integran al mercado se vean afectadas producto de estos carteles, tal como fue el caso de Acuenta quien se vio ampliamente afectada por la colusión, ya que ambas papeleras involucradas tenían más del 90% del stock del comercio. Asimismo, las penas impuestas actualmente pueden llegar a ser cruciales para futuras colusiones, ya que no se incentiva la competencia mediante penas tan mínimas en comparación al daño ocasionado al mercado, el Estado y los consumidores/as.

Finalmente, se cree necesario que las leyes referidas a las regulaciones del mercado sean de carácter preventivo, para de esta forma no tener nuevos casos como los ya mencionados y a su vez suscitar un escarmiento a quienes deseen ser parte de algún cartel. Asimismo, se considera primordial ser enfáticos en penalizar impetuosamente a las empresas coludidas (o que efectúen delitos económicos) aun cuando “colaboren” con la investigación.

Lecciones institucionales: Promoviendo iniciativas de control

Es debido a este caso de corrupción y a otros que han afectado directamente a los consumidores, que el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), tuvo que empezar por reformularse e innovar en cuanto a la prevención de estos delitos. El año 2018 promulgó la Ley N°21.081 que

fortalece las acciones del SERNAC y a su vez le entrega la facultad de fiscalizar a las empresas, esto en el marco de proteger más firmemente los derechos de los consumidores, esta ley entró en vigencia el día 14 de marzo del 2019.

Dentro de la Ley N°21.081 se comienza a hablar de planes de compliance o cumplimiento, estos temas son instrumentos que establecen políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados por una empresa para acatar la normativa vigente de protección al consumidor, incorporando medidas preventivas, correctivas y de detección de eventuales incumplimientos e infracciones a la ley (SERNAC, 2018). Asimismo, se establece dentro de la ley mencionada anteriormente que el SERNAC tendrá la facultad de fiscalizar los planes de compliance de las empresas y de validarlos, para de este modo actuar de manera preventiva y al mismo tiempo de fomentar las buenas prácticas de las empresas.

Cuando comience a regir la ley, el SERNAC podrá implementar dos tipos de programas, el primero es un programa preventivo, el cual debe estar establecido antes de la infracción y que servirá como atenuante en futuras acciones a determinar. El segundo programa es correctivo que se da cuando ya se cometió la infracción y se procederá a investigar los antecedentes antes de un juicio preventivo, protegiendo el interés colectivo de los consumidores. Cabe recalcar que el SERNAC tendrá también la facultad de citar a declarar a los representantes legales de las empresas, administradores y asesores. También dentro de la norma se disponen compensaciones por daño moral colectivo y multas por cada consumidor afectado (Soto, 2019).

Por su parte, el SERNAC estará constantemente evaluando los planes de cumplimiento que tengan las empresas, pudiendo de esta manera detectar irregularidades y como en este caso, colusiones y frenándolas de tal manera que no sean una fuerte repercusión. De esta manera también el Servicio se encargará de tener constantemente capacitaciones a los funcionarios externos para que adopten la norma y empleen las buenas prácticas dentro de cada institución, siempre en el marco de proteger los derechos de los consumidores. Las empresas por su parte crearán estos planes y tendrán constante relación con el SERNAC para ir evitando infracciones, multas, y para no perder recursos en juicios y tampoco perder la legitimidad.

Finalmente, es preciso destacar la importancia de que exista un aumento en las fiscalizaciones a nivel estatal, para que de esta manera no recaiga todo el “peso” de las inspecciones en SERNAC, aumentando de esta forma la responsabilización de los gobiernos de turno y el Estado en general. Asimismo, se espera que con esta serie de casos de colusión la ciudadanía asuma un rol más consciente y exigente de buenas prácticas empresariales, para que de esta manera se conviertan en el primer filtro de fiscalización, y a su vez se susciten espacios públicos/ciudadanos de discusión y presión al ejecutivo y judicial para que se tomen mayores y mejores medidas al respecto, volviendo de esta forma más compleja la conformación de fraudes.

Referencias

- Castillo, G. (16 de noviembre de 2015). Radio Uchile. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://radio.uchile.cl/2015/11/16/colusion-del-papel-monto-defraudado-superaria-los-800-millones-de-dolares/> 16-11-2015
- Cooperativa. (29 de diciembre de 2017). Cooperativa. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/competitividad/libre-competencia/multan-a-sca-con-18-millones-de-dolares-por-la-colusion-del-papel/2017-12-29/123042.html>
- Durante, N. (25 de noviembre de 2015). la Tercera. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/noticia/fne-indago-rol-de-kimberly-clark-en-colusion-del-tissue/>
- FNE. (29 de Diciembre de 2017). Fiscalía Nacional Económica. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <http://www.fne.gob.cl/tdlc-condena-a-cmpc-y-sca-por-colusion-en-el-mercado-del-papel-tissue/>
- Jara, & Álvarez. (7 de noviembre de 2015). 24 Horas. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.google.com/url?q=https://www.24horas.cl/noticiasbbc/el-cartel-del-confort-el-papel-higienico-que-ensucia-la-imagen-empresarial-en-chile-1830460&sa=D&ust=1561047143449000&usg=AFQjCNGKDE0tpizd5p9sM2SK2Ah8t4XgeA>
- La Tercera. (28 de octubre de 2015). La Tercera. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/noticia/colusion-de-papel-higienico-fiscalia-nacional-economica-presenta-requerimiento-por-colusion-contr-a-cmpc-y-sca/>
- Molina, P. (2015 de octubre de 30). 24 Horas. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.24horas.cl/noticiasbbc/el-cartel-del-confort-el-papel-higienico-que-ensucia-la-imagen-empresarial-en-chile-1830460> 30-10-2015
- SERNAC. (27 de enero de 2017). Servicio Nacional del Consumidor. Recuperado el 03 de julio de 2019, de <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-5241.html>
- SERNAC. (12 de diciembre de 2017). Servicio Nacional del Consumidor. Recuperado el 3 de julio de 2019, de <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-8960.html>
- Soto, C. (29 de octubre de 2015). La Tercera. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/noticia/bachelet-por-colusion-del-papel-tissue-me-parece-un-hecho-de-la-maxima-gravedad/>
- Soto, C. (29 de octubre de 2015). La Tercera. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/noticia/como-funcionaba-la-colusion-del-mercado-del-papel-tissue-que-fue-destapada-por-la-fne/>
- Diario UChile. (16 de noviembre de 2015). Radio UChile. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://radio.uchile.cl/2015/11/16/colusion-del-papel-monto-defraudado-superaria-los-800-millones-de-dolares/>

- EcuRed. (s.f.). EcuRed. Recuperado el 16 de junio de 2019, de https://www.ecured.cu/Papel_tissue
- Economía y negocios. (08 de marzo de 2017). <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=342070>.
- El Desconcierto. (27 de agosto de 2017). El Desconcierto. Recuperado el 17 de junio de 2019, de <https://www.eldesconcierto.cl/2017/08/27/redes-vive-en-otro-mundo-duras-criticas-a-presidente-de-la-sofofa-por-explicacion-ante-la-colusion-del-papel-confort/>
- El mercurio. (08 de marzo de 2017). <http://www.elmercurio.com/inversiones/noticias/acciones/2017/03/08/sca-acusa-colusion-entre-cmpc-y-ds-en-caso-tissue.aspx>.
- El Mostrador. (7 de diciembre de 2016). El Mostrador. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.elmostrador.cl/mercados/2016/12/07/estudio-de-la-fne-revela-que-cmpc-y-sca-obtuvieron-hasta-us458-millones-extras-en-beneficios-en-colusion-del-tissue/>
- El Mostrador. (12 de abril de 2016). El Mostrador. Recuperado el 17 de junio de 2019, de <https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/12/colusion-eliodoro-matte-asegura-en-su-ultima-carta-a-los-accionistas-que-cmpc-esta-dispuesta-a-reparar-el-dano-causado/>
- El Mostrador. (4 de abril de 2017). El Mostrador. Recuperado el 17 de junio de 2019, de <https://www.elmostrador.cl/mercados/2017/04/04/colusion-del-papel-la-justicia-sin-verdad-en-el-juicio-que-tiene-enfrentados-en-una-batalla-sin-cuartel-a-cmpc-y-sca/>
- La Tercera. (05 de noviembre de 2017). La Tercera. Recuperado el 17 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/noticia/los-protagonistas-a-dos-anos-de-la-colusion-del-papel/>
- La Tercera. (21 de febrero de 2018). La Tercera. Recuperado el 26 de junio de 2019, de <https://www.latercera.com/negocios/noticia/cmpc-consolida-primer-lugar-tissue-dos-anos-del-caso-colusion/74332/>
- SERNAC. (2018). Obtenido de <https://www.sernac.cl/portal/617/w3-propertyvalue-63006.html>
- Soto, X. (14 de enero de 2019). Idealex. Obtenido de <http://idealex.press/opinion/columnas/programas-de-compliance-ximena-soto/>
- T13. (07 de noviembre de 2015). T13. Recuperado el 16 de junio de 2019, de <https://www.t13.cl/noticia/negocios/cmpc-tissue-aumento-400-sus-ingresos-12-anos-colusion>
- The Clinic. (26 de febrero de 2016). The Clinic. Recuperado el 17 de junio de 2019, de <https://www.theclinic.cl/2016/02/26/confortgate-los-correos-y-declaraciones-sobre-como-se-formo-opero-y-termino-la-colusion/>